

# Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL

ABRIL DE 2006

AÑO V • N° 70

2 PESOS

ISSN 1669- 9122

Situación Mundial

Las restricciones políticas  
a las grandes fusiones

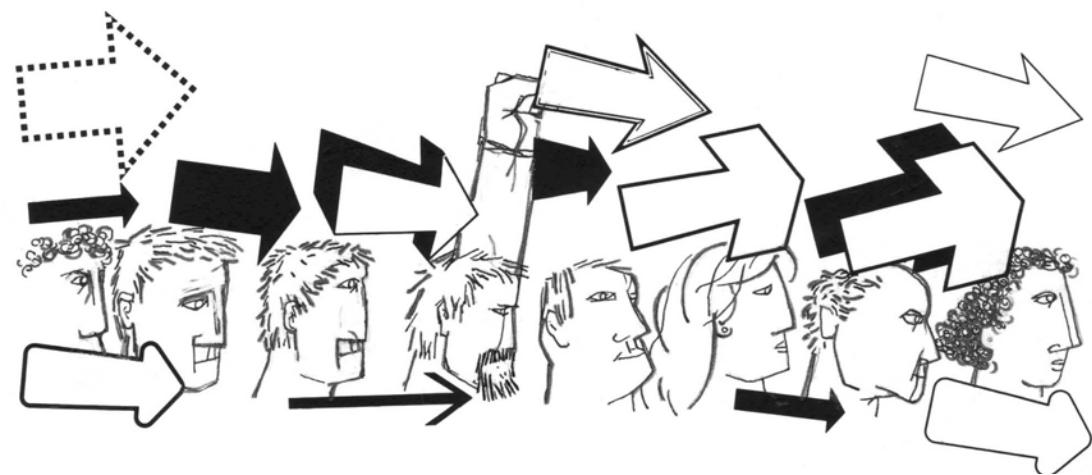
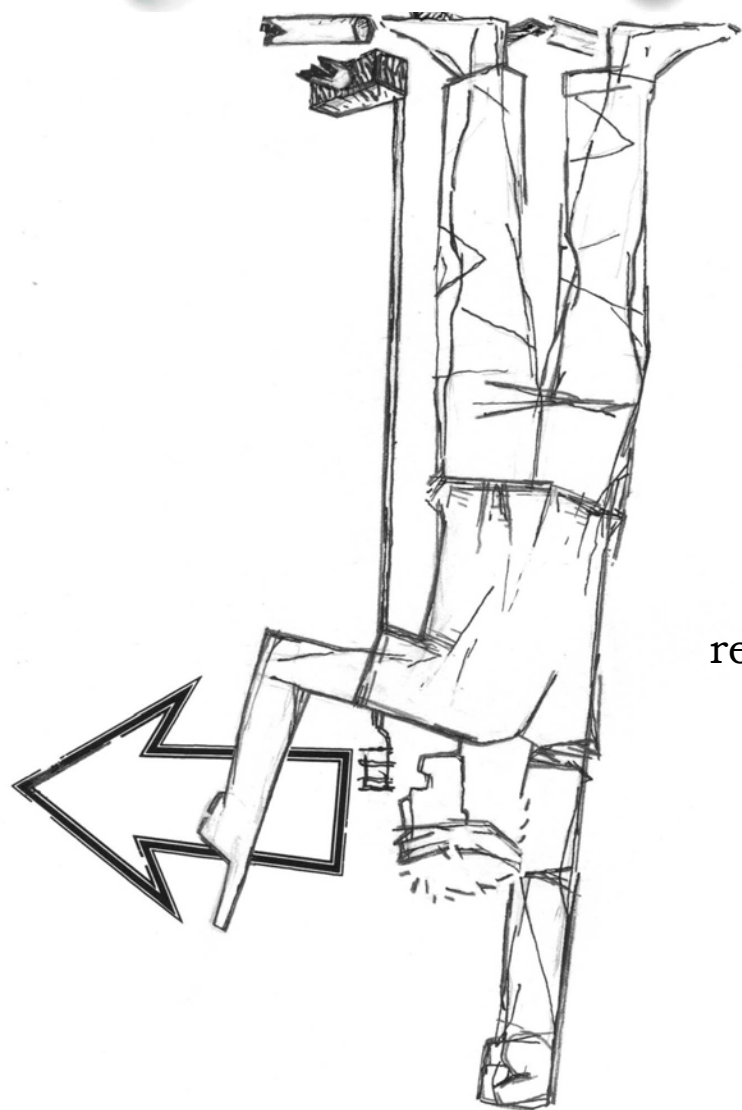
América Latina

La región andina:  
entre Tratados de Libre Comercio  
y movilización popular

Argentina

Aguas y carnes:  
recomponiendo la intervención estatal

Estallidos inconexos,  
¿qué te preocupa Mariano?



# Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL  
ABRIL DE 2006  
AÑO V • Nº 70  
ISSN 1669-9122

**Equipo de trabajo:** Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Santiago Juncal, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak, Sergio Zisman. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.

**Responsable de la publicación:** Alejandro Viegas

**Lugar de edición:** 3 de febrero 2855 'D', (1644) San Fernando.

**Fuentes consultadas:** EE.UU.: *Wall Street Journal* (WSJ), *New York Times* (NYT); *Washington Post* (WP); *Usa Today* (UT). – Francia: *Le Figaro* (LF); *Le Monde* (LM) – Gran Bretaña: *The Economist* (TE); *BBC News* (BBC) – España: *El País* (EP); suplemento Nueva Economía de *El Mundo* (NEEL) – México: *La Jornada de México* (LJdM) – Venezuela: *El Universal* (EUn) – Colombia: *El Tiempo* (ET) – Bolivia: *Los Tiempos de Cochabamba* (LTC) – Perú: *La República* (LR) – Brasil: *Folha de Sao Paulo* (FSP); *O estado do Sao Paulo* (OSP); *Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo* (FDT-FSP) – Argentina: *Clarín* (C); *La Nación* (LN); *Página 12* (P/12)

**Para contactarnos:** [informecon@yahoo.com.ar](mailto:informecon@yahoo.com.ar)

Números anteriores disponibles en [www.geocities.com/informecon](http://www.geocities.com/informecon)

## En este número

Rodrigo de Rato, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), identificó los tres mayores riesgos para la continuidad del crecimiento económico mundial: el alto precio del petróleo, la posible pandemia de gripe y las tendencias proteccionistas. Las críticas a estas últimas no sorprenden a nadie en boca de un representante global del capital financiero, que pide así mayor libertad de movimientos para las mercancías. Rato reprochó a los países desarrollados con la vista puesta en las negociaciones de la OMC, trabadas por los subsidios agrícolas de estos países. En SITUACIÓN MUNDIAL veremos otra forma de proteccionismo, también practicada por los países más desarrollados: la restricción de inversiones. En el caso de la UE, se trata fundamentalmente de otro aspecto de su conformación como un único espacio de acumulación, un proceso necesariamente conflictivo en tanto la concentración y centralización de capitales resultará en un tendal de empresas nacionales absorbidas por vecinos mayores o ¡peor aún! por empresas de fuera de la UE. En el caso de EE.UU., las restricciones se aplicaron a empresas de países en desarrollo que recidan capitales resultantes del desequilibrio comercial externo de EE.UU., y de la expansión de las propias empresas estadounidenses más allá de sus fronteras.

En AMÉRICA LATINA, EE.UU. promueve la integración comercial del continente aunque, trabado el ALCA, debe recurrir a la vía más lenta de los Tratados de Libre Comercio bilaterales. Así, Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay están en diferentes momentos de las negociaciones, y el proteccionismo lo plantean sectores sociales diversos que incluyen desde fracciones de las burguesías locales a sectores populares. Los efectos de estos tratados son tales, que el mismísimo Banco Mundial advierte que *“si no se toman medidas aumentará la pobreza en Colombia”*, país que más cerca está de estampar su firma.

Por su parte, ARGENTINA muestra una disputa por la riqueza social en la que el gobierno ha recurrido a una fuerte intervención estatal. La reestatización de los servicios de agua potable y cloacas muestra al gobierno tomando una medida extrema, que si bien estaba en línea con la necesidad de una fracción del capital local de recuperar el manejo de los recursos estratégicos concesionados, quizá por lo extrema no es públicamente sostenida por ningún representante de la burguesía más concentrada. Eso mismo ocurrió con la prohibición de exportar carne vacuna, que desató esperables quejas y medidas de fuerza entre las corporaciones rurales. La situación política fue marcada por la sucesión de “explosiones” locales que señalaron –como lo muestra la alarma de Mariano Grondona– que la democracia representativa está lejos de haberse repuesto de su profunda crisis. Señales que han coincidido con los 30 años del último golpe de Estado. Un aniversario en que ya no se discutió la existencia del terrorismo de estado y en que también se condenó, desde las FF.AA. y el gobierno, el modelo económico que la represión venía a instalar.

Adelante...

### Situación Mundial

#### 4 Situación Política

Las restricciones geopolíticas a las fusiones

#### América Latina

#### 10 Pelea por las Ganancias

NAFTA: el precursor

Cambios económicos en el área andina: consolidación política de unos, debilidad política de otros

Ecuador: se fortalece la oposición indígena y traba la firma del TLC

Perú: Elecciones y TLC

Un compás de espera entre EE.UU. y Uruguay

#### 14 Seguridad

Doctrina Nacional de Seguridad versión 2006-2010

#### Argentina

#### 16 Pelea por las ganancias

La consolidación de un esquema cada vez más desigual y las presiones en contra

La recomposición... (I): la reestatización de Aguas Argentinas

La recomposición... (II): el control de las carnes

#### 20 Coyuntura política

La descomposición de la “política tradicional”

Organización y acción popular: conflictos locales

24 de marzo, el “caso testigo” a nivel nacional

## Situación Mundial

De haberse producido algunos años atrás, la estatización de Aguas Argentinas hubiese desencadenado una andanada de declaraciones en contra, e incluso golpes de mercado, dirigidos contra el personal político promotor de medidas semejantes. Actualmente, se observa una sorprendente mesura en las declaraciones de aquéllos sectores críticos de la operación. La simultánea existencia de casos similares en el resto del planeta nos lleva a considerar que se trata de una tendencia general del momento actual del sistema capitalista. Evidentemente, el escenario político ha cambiado, aunque no tanto el estrictamente económico. Las necesidades de cada fracción de capital de incrementar su envergadura productiva y, con ello, su participación en el mercado, constituye el reflejo de la propia esencia del sistema capitalista. La tendencia a la centralización y concentración del capital, considerado globalmente, se expresa en los grupos económicos que utilizan las distintas variantes (adquisiciones, asociaciones, fusiones, etc.) que cada una de las formas (nacionales y supranacionales) fue conformando en el devenir histórico.

Entonces, las estructuras y formas de organización política encargadas de administrar, regular, promover o

restringir dicho proceso —y su correlación con las distintas fracciones del capital involucradas— constituyen el tema que será abordado en este número, en Situación Mundial. En definitiva, se trata de observar las formas *contratendenciales* de un proceso inevitable y que expresa la unidad contradictoria entre esencia y forma.

Por un lado, están las permanentes exhortaciones para revitalizar la agonizante Ronda de Doha de la OMC, que expresan las necesidades esenciales de la reproducción del capital considerado globalmente. Por otro, los casos que analizaremos, en los cuáles cobran entidad las necesidades del espacio político en el que se desenvuelve cada una de las fracciones del capital global, las que conforman las unidades esenciales de la reproducción y acumulación de capital. Expresando la tensión existente al interior de la unidad mencionada, Giulio Tremonti, ministro de Economía italiano y representante político de las fracciones que pierden, sentenció: *‘Europa se enfrenta al efecto agosto de 1914’, en referencia al auge proteccionista que alimentó la Primera Guerra Mundial* (NYT 28/02/06). Para la próxima entrega quedarán las masivas manifestaciones sociales, especialmente en Francia, que motorizan la historia e imprimen a la acumulación de capital sus formas concretas.

### Situación Política

#### Las restricciones geopolíticas a las fusiones

En el último mes, se desarrollaron una serie de intentos fallidos de adquisiciones de empresas de distintas ramas. Tanto en la Unión Europea como en EE.UU., consideraciones de carácter político restringieron las posibilidades de concreción de operaciones que habitualmente se desarrollan. Analizaremos dichos casos con la intención de deducir en dónde radica su excepcionalidad y qué es lo que expresan.

#### Agua y Energía en la Unión Europea

La formación de un mercado único europeo en los sectores energético y bancario —claramente retrasados con respecto a otros— viene siendo una apuesta fuerte de la comisión que regula la competencia en la UE. El noviembre pasado, ésta emitió un informe-recomendación dirigido al Parlamento Europeo, donde se lamenta de la escasa apertura de los mercados europeos en el sector de energía: *“La apertura del mercado comenzó en muchos estados miembro a partir de una estructura de mercado de monopolio o, al menos, de oligopolio”, explica el informe. La intención, al introducir la competencia, era poner fin a esta situación, exponiendo a las empresas a la competencia en toda la UE. Esto todavía no se ha logrado en la mayor parte de los mercados*” (LF 16/11/05). Para medir el grado de apertura de los mercados de energía, la comisión utiliza la suma de las cuotas de cada mercado nacional de los tres principales operadores nacionales. A fines de 2004, un extremo de esta escala lo ocupaban Francia (96%) y Grecia (97%). En el otro, figuraban Reino Unido (39%) y el cuarteto compuesto por Suecia, Noruega,

Dinamarca y Finlandia (con un 40% cada uno). España y Alemania se ubicaban en el medio, con un 74% y un 72% respectivamente.

Las diferentes empresas observaron el escenario y tomaron nota de la recomendación. El resultado fue una fiebre de ofertas y de intentos hostiles de adquisición de empresas del sector.

#### E.On (Alemania) o Gas Natural (España) y Endesa (España)

En septiembre de 2005, Gas Natural —cuyo principal accionista es La Caixa de Barcelona— lanzó una Oferta Pública de Acciones (OPA) sobre Endesa de 21,2 euros por acción, con apoyo del gobierno. La intención de Zapatero apunta a formar un “campeón nacional” de la energía. En caso de concretarse la operación, la compañía resultante tendría el control del 78% de la electricidad y el 90% del gas en España. El Partido Popular, que precedió al gobierno socialista actual, ya había intentado crear un “campeón nacional” de la energía por medio de fusiones que resultaron abortadas (Unión Fenosa-HC, Endesa-Iberdrola y Gas Natural-Iberdrola). *“Las circunstancias y el deseo de darle a España un campeón nacional le han llevado a calcar el modelo alemán. El mercado, en el país centroeuropeo, siempre ha pivotado sobre dos gigantes: RWE y E.On. Esta última se fusionó hace tres años con Rbugas. La unión fue prohibida por el equivalente alemán al Tribunal de la Competencia, pero el ex canallero Gerhard Schröder apeló al interés nacional para justificar su aprobación*” (EM NE 5/03/06). Eso le permitió a E.On disponer de condiciones de crecimiento que le hicieron incrementar sus ganancias netas, en 2005, un 71% respecto del año

anterior, las que habían alcanzado los 7.400 millones de euros. Justamente, fue de ese país de donde provino la amenaza para la operación desde la vertiente del capital.

En febrero, se conoció una oferta de E.On –que fue formada en 2000, tras la fusión de VEBA y VIAG, dos de los mayores grupos industriales de Alemania– sobre Endesa, que supera a la de GN (27,5 euros por acción). *“La oferta de E.On representa la mayor adquisición de una empresa de servicios públicos de la historia y, excluyendo deuda, el mayor acuerdo en efectivo realizado en Europa (...). Si prospera la propuesta de E.On, el acuerdo sería el mayor paso hacia la consolidación de la industria europea de la energía, en un momento en que varios monopolios estatales, rebosantes de efectivo, exploran el continente en busca de oportunidades de expansión”* (WSJ 22/02/06). El monto total de la operación alcanzaría los 29.100 millones de euros, algo más del doble del monto de la mayor fusión de la historia en el sector (compra de Coastal por parte de El Paso Energy, ambas de EE.UU., en 2000).

El gobierno de Zapatero decidió bloquear la oferta alemana mediante un decreto –luego convalidado por el Congreso– que permite a la Comisión Nacional de la Energía frenar la adquisición por razones “de estrategia nacional”. Ésta es la primera medida de bloqueo establecida. Aún dispone de otras, como la acción de oro que posee el gobierno en Endesa y una legislación de 1999 que permite bloquear la adquisición de una empresa nacional por parte de otra extranjera en la cual el estado sea accionista (el estado de Hamburgo tiene acciones de E.On). Esto puso al gobierno socialista frente a la ofensiva conjunta de la Comisión Europea, la prensa española –con el diario El Mundo, particularmente, en una especie de campaña de ataques al gobierno por este tema– y la misma junta directiva de Endesa, que se resistió desde un primer momento a la oferta de E.On. –aunque puede tratarse de una estrategia para que los alemanes mejoren su oferta.

### **Enel (Italia) o Gaz de France (Francia) y Suez (Francia)**

El gobierno francés “armó” una fusión entre Suez y Gaz de France (GdeF) como medida anticipatoria a una OPA de la italiana Enel –hasta el momento no anunciada formalmente–, que a su vez, como jugada previa de absorción de Suez, intentó quedarse con la belga Veolia. La fusión Suez-GdeF crearía un consorcio con una capitalización de 80.000 millones de euros, que sería el quinto en producción de electricidad en Europa, operador de la primera red de transporte y distribución de gas y también líder europeo en la dotación de agua potable y en la gestión de desechos. GdeF es pública; Suez es privada. Por ello, cabe suponer que se trata de una privatización encubierta, en la que el estado probablemente se desprendería de la mayor parte de sus acciones en la empresa, lo que traería problemas con los sindicatos.

Lo más relevante es que, si se exceptúa la adquisición del 49% de las acciones de la belga Electrabel por parte

de la francesa Suez en agosto de 2005 –cuyo carácter transnacional debe ser, de todas maneras, matizado, pues Francia y Bélgica forman un continuo económico-cultural muy fuerte–, los casos mencionados representarían las primeras grandes fusiones transfronterizas en el sector de la energía.

### **Siderurgia en la Unión Europea**

#### **OPA de Mittal Steel (India-Reino Unido-Holanda) sobre Arcelor (Francia-Bélgica-España-Luxemburgo)**

Mittal Steel, la primera acería mundial, presentó una OPA por 18.600 millones de euros para quedarse con la segunda acería del mundo, Arcelor (que controla a la brasileña Belgo Mineira, que a su vez posee el 73% de la argentina Acindar). En realidad, se trata de competidores de envergadura similar, pues la primera es la mayor en volumen de producción pero la segunda lo es en ventas. Inmediatamente, el Consejo de Administración de Arcelor la rechazó por unanimidad.

Como Mittal no retiró la oferta, Arcelor concibió estrategias para resistir los intentos. Como primera medida, decidió reestructurar Dofasco, un grupo canadiense que acaba de comprar, y que Mittal ya acordó vender a Thyssen-Krupp por 4.600 millones de dólares. Es decir, la jugada de Arcelor apunta a dificultarle a Mittal el financiamiento de la OPA. Otra maniobra que se comenta es venderle el 15% de sus acciones a Vladimir Lisin, un oligarca ruso del acero que se comprometería a no desprenderse de este paquete. El Consejo de Administración espera que por lo menos un porcentaje apreciable de accionistas respeten su recomendación de no venderle sus acciones a Mittal.

### **Administración de terminales portuarias en EE.UU.**

#### **Adquisición de Peninsular & Oriental Steam Navigation Co. (Inglaterra) por Dubai Ports World (Emiratos Árabes Unidos)**

El caso que analizamos en EE.UU. es aún más complejo. La compra de Peninsular & Oriental Steam Navigation Co. por parte de Dubai Ports World en 6.800 millones de dólares, fue aprobada por los jueces británicos, pues se trata de una compañía oriunda de Inglaterra. Dicha empresa posee la concesión, en algunos casos por treinta años, de seis terminales portuarias norteamericanas: New York, New Jersey, Baltimore, Filadelfia, Miami y New Orleans, a través de su subsidiaria P&O Ports. Entonces, al adquirir el paquete accionario de dicha empresa, Dubai Ports World adquiere otras, sometidas a las normas en materia de inversión extranjera de EE.UU. El organismo encargado de aprobar las tratativas, el Comité de Inversión Extranjera en EE.UU. (CFIUS, por sus siglas en inglés) analizó el caso y lo aprobó finalmente. Dicho comité está presidido por el Departamento del Tesoro y en él tienen participación funcionarios de 12 dependencias federales, incluyendo representantes de la Casa Blanca.

Una vez conocida la operación en medios políticos, especialmente el Congreso, las reacciones se convirtieron rápidamente en una tormenta política. El agitado momento que atraviesa el gobierno, junto con las reacciones de todo el arco político —las que desarrollaremos en el próximo apartado— llevaron al presidente Bush a amenazar al Congreso con vetar cualquier norma que impida la celebración del acuerdo (WP 22/02/06). Pero esta reacción intempestiva fue sucedida por llamados a la mesura y al diálogo con el Poder Legislativo, desapareciendo como opción posible la mencionada acción presidencial. Finalmente, “*DP World, controlada por el gobierno de Dubai, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos, decidió ayer retirar su oferta por seis puertos de EE.UU., aliviando así el creciente conflicto entre la Casa Blanca y los republicanos y demócratas en el Congreso*” (WSJ 10/03/06). Esta solución, negociada entre bambalinas y que conformó a los involucrados, permitió dar cuenta del peso que tienen en este momento las consideraciones geopolíticas en el curso de la acumulación de capital. Observemos cuales fueron las cuestiones decisivas y su peso real, presentes detrás del argumento de “seguridad nacional”.

La razón principal esgrimida contra la operación, como veremos, fue la seguridad interna. Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue uno de los primeros países en reconocer, en su momento, al régimen talibán que tomó el poder en Afganistán —allá por mediados de los ’90—, hecho que significó una mancha en la foja de antecedentes. Inclusive, transformarse en un aliado de EE.UU. en la región y de los capitales financieros más concentrados no fue suficiente para desechar definitivamente las consecuencias de esa acción. “*Hace cuatro años, el jeque Mohammed invitó a la flor y nata de la industria financiera a que se instalara en uno de los rincones más conflictivos, con el fin de transformar a Dubai en un centro financiero internacional de la talla de New York, Londres o Tokio*” (WSJ 2/03/06). Asimismo, las gestiones emprendidas para conseguir la aprobación del acuerdo, calcularon las formas habituales de lobby ejercidas por las empresas en EE.UU. En efecto, “*algunos de los más grandes lobbistas se unieron a Dubai Ports World. El elenco incluyó al ex líder del senado, Bob Dole (repblicano por Kansas), y una ponderosa pareja demócrata de Washington, el ex representante por New York Tom Downey y Carol M. Browner, ex directora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). La firma de abogados de Dole, Alston & Bird LLP, condujo las gestiones ante el CFIUS*” (WP 23/02/06). Bajo su consejo, las concesiones realizadas, que no fueron suficientes, incluyeron “*la apertura de libros sin intervención judicial, a pedido del representante en el CFIUS del Departamento de Seguridad Interna. Associated Press informó anoche que la administración, antes de dar el visto bueno a la operación, secretamente requirió que la firma coopere con futuras investigaciones*” (WP 23/02/06). Esto significaba que el Poder Ejecutivo había obtenido, a cambio de la aprobación, concesiones suficientes como para hacer apetecible el acuerdo: acceso a información sensible que podría dar cuenta de mecanismos de financiamiento del terrorismo.

Por ello, de alguna manera, es sorprendente el bloqueo de la operación, que obviamente no tiene retorno. Es importante considerar que “*más del 60% de las terminales para contenedores en diez de los puertos más transitados de EE.UU. están hoy manejados, aún parcialmente, por operadores no estadounidenses, y en algunos casos por compañías controladas por gobiernos extranjeros. Esta cifra sube a 80% en los puertos más grandes —Los Angeles/Long Beach en California y New York/New Jersey—, que manejan en conjunto la mitad de los contenedores que pasan por EE.UU. En la mayoría de los casos, las terminales son operadas por la compañía que usa los puertos. Típicamente, el administrador de la terminal es una subsidiaria de la compañía de transporte extranjera*” (WSJ 10/03/06). Aún más, “*las dos grandes compañías de transporte marítimo chinas son en parte propiedad del gobierno y tienen intereses en terminales de la costa oeste*” (WSJ 10/03/06). Pero cabe entonces realizar una aclaración en función del ordenamiento del espacio de acumulación norteamericano. La totalidad de los puertos involucrados en la operación pertenecen a la costa este, lo que significa que es la entrada principal de ciertos productos que provienen de Europa, África y, en parte, Medio Oriente. Distinto es el status de los de la costa oeste, por donde fluye el grueso de la producción asiática. Esto se refleja en la composición de los operadores extranjeros: mientras en la costa oeste existen empresas de Dinamarca, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y, lo más importante a efectos políticos, China; en la costa este sólo tienen presencia, inclusive minoritaria, Dinamarca (a través de una empresa privada) y Singapur (a través del brazo de inversión del gobierno). Estas consideraciones, importantes pero no decisivas hasta que se conoció la operación en cuestión, pasaron a instalar un nuevo tema en la agenda, lo que parece mostrar un salto cualitativo.

Una vez conocido el rechazo de la operación, los mecanismos institucionales comenzaron a aplicarse en una especie de “caza de brujas” en procura de limitar intereses extranjeros en industrias o empresas estratégicas. “*La administración Bush lanzó una investigación nacional sobre otra empresa de Dubai, establecida para adquirir plantas en Georgia y Connecticut, que fabrican componentes de precisión utilizados en aviones militares y tanques. El CFIUS se encuentra analizando las implicaciones, en materia de seguridad, de la compra, por parte de Dubai International Capital, de la empresa con sede en Londres Doncasters Group Ltd. — que también tiene subsidiarias en EE.UU.— por 1.200 millones de dólares. También investiga los planes de una compañía israelí de adquirir la firma de software de seguridad con sede en Maryland, Sourcefire, que posee contratos con el Departamento de Defensa*” (WP 2/03/06). Es razonable considerar que, habida cuenta el status de centro financiero del que goza Dubai, como señalamos más arriba, las operaciones con Londres se traten más bien de los mismos capitales que se trasladan a regiones con mejores condiciones o se asocian con otros radicados en esos lugares: “*Dubai International Capital es el brazo financiero de Dubai Holding, un conglomerado de inversión que es el tercer accionista más importante de Daimler Chrysler Corp. y el más importante de la cadena de hoteles Holiday Inn Express en Medio Oriente*” (WP 2/3/06).

Lo que resulta sorprendente es que *“de las 1.500 adquisiciones evaluadas por el CFIUS, sólo una fue rechazada. No obstante, los tratos con implicaciones sobre seguridad tienden a ser más escrutados y aun en el período extendido de 45 días de análisis. En 1989, 204 operaciones fueron analizadas por este procedimiento. El año pasado, sólo 65”* (WP 2/03/06). Con estos guarismos, la iniciativa del Ejecutivo de incrementar el control quedó corta en opinión del Poder Legislativo, que rápidamente elaboró proyectos para modificar el régimen de inversión extranjera. La senadora Susan Collins, republicana por Maine y presidente del Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado, impulsó un proyecto de reforma que reemplaza el CFIUS por un nuevo organismo, denominado Comité de Comercio Seguro, que no dependería del Departamento del Tesoro sino del de Seguridad Interna. Éste ejercería la presidencia y los Departamentos del Tesoro y Defensa, una vicepresidencia cada uno (GovExec.com. 14/03/06). Ante esta iniciativa, el presidente del Comité Financiero del Senado, el senador Richard Shelby (republicano por Alabama), propuso una modificación diferente. Siendo titular del comité encargado de supervisar al CFIUS, pretende realizar ajustes sin modificar la estructura actual, evitando el proyecto de Collins, que supondría una erosión de su poder. La disputa sobre qué departamento define los criterios de seguridad nacional es la manifestación de la correlación de fuerzas entre las dos facciones de la alianza republicana en el gobierno. Aquella más vinculada a los contratistas de defensa (el llamado “complejo industrial militar”) reafirmó su primacía luego de la reelección de 2004. La manifestación más clara fue el reemplazo de Colin Powell por Condoleezza Rice al frente del estratégico departamento de Estado. A su vez, la iniciativa muestra un esfuerzo redoblado por reducir la influencia del Departamento del Tesoro, cuestión que ya se hizo visible con el reemplazo de Paul O’Neill por John Snow. Observando los alineamientos, podremos sopesar las posibilidades de éxito de cada uno de ellos.

Por otra parte, los mecanismos de mercado comenzaron a ponerse también en funcionamiento. Revelando a su vez, la interpenetración de las distintas fracciones de capital en el nivel de concentración apropiado para una rama como los servicios portuarios. Comenzó una carrera por buscar grupos económicos que asuman la tarea, ya que *“cerca del 75% de los containers que ingresan por puertos de EE.UU. son operados por firmas extranjeras. Directivos de SSA Marine con sede en Seattle, el mayor operador nativo de puertos, afirmó que no había sido contactado por las autoridades. Los potenciales oferentes podrían buscar asociarse con empresas que ya manejan operaciones en el sector. Pero el proceso recién comienza, y DP World parece no querer precipitarse y malvender la inversión. Un potencial candidato es la firma de inversión con sede en Washington, el Carlyle Group, que adquirió el negocio de manejo de containers de CSX Corp. en 2002 por 300 millones de dólares y lo vendió dos años después por 650 millones. De hecho, el gobierno de Dubai es inversor en Carlyle. En el último fondo para realizar compras, de 7.850 millones colocó 100 millones”* (WP 10/03/06). En vista de ello, aparece como

posible que Dubai disponga de dicha inversión, pero con un grupo norteamericano capturando los órganos de decisión y, por ende, el grueso de la ganancia; dejando para los árabes una renta financiera cuyo volumen será determinado por el mercado internacional de capitales.

### Los alineamientos políticos

Las repercusiones en cada uno de los espacios de acumulación de capital —por un lado EE.UU. más Canadá y México, aunque estos dos últimos sin poder de decisión debido al grado de subordinación, y por otro la UE— están permeadas por la propia conformación de los diferentes ámbitos de decisión política. A diferencia de lo que sucede con EE.UU., se supone que la UE funciona —o debería funcionar— como un *megaestado*. Las directivas de la Comisión Europea (CE) y las leyes aprobadas en el Parlamento son vinculantes, con lo cual la CE podría, por ejemplo, obligar a los gobiernos a respetar la norma europea. Existen probabilidades de que ése sea el caso de E.On/Endesa, pero ello depende de la correlación de fuerzas de que dispongan los involucrados. A continuación, realizamos un breve inventario de los alineamientos y las iniciativas de los diferentes protagonistas:

### Unión Europea

*“Todos los países europeos tratan de tener campeones en el sector energético”* (LF 7/03/06), declaró José Montilla, ministro de Industria español. Esta posición se refuerza con el dictamen de la Comisión de Energía (dominada por el PSOE) en la que se señala que, ante una crisis en el abastecimiento de energía, E.On privilegia los intereses alemanes por sobre los españoles. Las reacciones del caso provinieron centralmente de la propia empresa objeto de disputa. En este caso fue Manuel Pizarro, su presidente, quien señaló que *“lo que necesita España es seguridad regulatoria y no campeones nacionales en el terreno empresarial, puesto que ya los tiene; y uno de ellos es Endesa.”* (EL NE 28/02/06). Fue el mismo que, cuando se presentó la oferta de GN, había declarado: *“Espero que no haya embarazo y que si lo hay, como no es consentido, se permita la interrupción voluntaria”*. (EM NE 9/09/05). Mientras tanto, ni el personal político alemán ni la propia E.On se expidieron, seguramente porque no puede decirse que prediquen con el ejemplo.

Las reacciones fueron inversas en el caso Enel. Berlusconi amenazó con impulsar una declaración de rechazo al “proteccionismo estatal”, pero ni los ingleses ni los escandinavos aceptaron firmarla. Esto hizo que los italianos se abstuviesen y Holanda, cuyo gobierno se expresó en contra del “patriotismo empresarial”, quedó sola en la iniciativa y la misma se diluyó. No obstante ello, una delegación italiana viajó a Bruselas a quejarse ante la Comisionado de la Competencia, Neelie Kroes, de las actitudes proteccionistas del gobierno francés y el ministro italiano de Industria, Claudio Scajola, reiteró los embates, pidiendo sanciones a la Comisión y caracterizando la acción como *“una enorme violación del derecho*

comunitario" (LF 4/03/06). En este caso, desde Francia escogieron el silencio, aunque las circunstancias que se viven actualmente en ese país permiten suponer que este tema no ocupa el centro de las prioridades políticas. Mientras tanto, la Comisión Europea, a través de la Comisionada de la Competencia, dijo que España tiene hasta el 25 de abril para justificar su acción; caso contrario, la legislación comunitaria puede obligarla a aceptar la OPA de E.On.

Las mayores repercusiones negativas provinieron de la prensa, con declaraciones tajantes. The Economist y Financial Times vienen haciendo campaña contra el "patriotismo empresarial". Mientras que Le Figaro utilizó la prudencia y la moderación al referirse a la cuestión, seguramente haciendo eco del temperamento de la opinión pública: *"La OPA lanzada por Mittal hacia Arcelor, las maniobras iniciadas por Enel y Veolia en torno a Suez, los rumores que señalan a Altadis como un bocado para Imperial Tobacco, a Lafarge como una presa de Cemex o a la Societe Generale como una del Citigroup, rebelan en Francia una gran preocupación por las operaciones hostiles (...) Un 69% de los franceses están de acuerdo con la intervención del estado en defensa de los grupos franceses (...) En Luxemburgo, un 67% de la población juzga legítima la acción defensiva de los poderes públicos en caso de maniobras agresivas contra un grupo nacional (...) Sin embargo, hay tres buenas razones para aceptar la legitimidad de las operaciones no solicitadas. En primer lugar, las OPAs constituyen las sanciones más radicales contra los gerenciamientos ineficaces (...) En segundo lugar, la amenaza permanente de una OPA obliga a los grupos más vulnerables a mejorar su capitalización bursátil, que es la mejor defensa contra un ataque, no la protección del estado ni las maniobras jurídicas (...) Finalmente, hay casos en los que las discusiones amigables entre dos grupos complementarios no llevan a ningún lado (...) Las OPAs hostiles a veces son la única manera de salir del impasse. Como decía Al Capone: se obtiene más siendo amable y estando armado que siendo solamente amable"* (LF 21/3/06).

Mucho más duros fueron los términos en España. Allí, la "prensa de negocios" salió "con los taponés de punta". En algunos casos, la agresividad es llamativa: *"La OPA de Gas Natural se ha convertido así en la OPA de Zapatero, un hombre dispuesto a usar la fuerza legítima del Estado para satisfacer ocultos intereses, (...) abrumado, sin la menor idea sobre legislación mercantil (...) Esto explica algunas de las cosas que están ocurriendo en esta España aterida por la sorpresa de un Gobierno chapucero, gente de escasa formación, que desconoce el funcionamiento de los mercados, que no ha dirigido una empresa, que no habla idiomas, no está viajada, y sobre la que de repente cae el manto del poder con su inmensa prepotente batuta. Jamás en la reciente Historia de España se había visto a un Gobierno más obscuramente empeñado en sacar adelante una operación mercantil. Jamás la tradicional colisión entre lo público y lo privado llegó tan lejos"* (EM NE 26/03/06). Aunque también, estos dichos revelan la cruda realidad: *"¿Qué ganaría España si unilateralmente se apartara de la afluencia de capitales foráneos? Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, el consumo mundial de electricidad se va a duplicar en los próximos veinticinco años. Las inversiones que hay que realizar para hacer frente a este reto energético mundial ascenderán,*

*como mínimo, a unos 700.000 millones de euros (a precios de hoy). Aquí se abren grandes oportunidades de producción y empleo para la industria energética europea. ¿Estarían las empresas energéticas españolas en condiciones de aprovechar estas oportunidades yendo solas, aunque se vayan a fusionar unas y otras entre sí?"* (EP 4/03/06).

## EE.UU.

Aquí, las reacciones en contra provinieron del personal político y en forma prácticamente unánime, excepto por una tibia amenaza del presidente Bush de vetar cualquier bloqueo del Congreso y por parte del Secretario del Tesoro. El enfrentamiento aquí tomó la forma de una lucha de poderes: el ejecutivo a favor y el legislativo en contra; sin embargo, en este último existían posiciones distintas, aunque concurrentes. El hecho alcanzó también a poderes estatales, donde se encuentran radicados los puertos: *"Los gobernadores republicanos de New York, George Pataki, y de Maryland, Robert Ehrlich Jr. se unieron al coro de críticas a la adquisición de las operaciones portuarias de las ciudades de New York, New Jersey, Baltimore, Philadelphia, Miami y New Orleans, por parte de Dubai Ports, lanzando iniciativas para explorar formas de evitar la concreción de la transacción. Los senadores demócratas Hillary Clinton y Robert Menéndez se estima que impulsarán una legislación que prohibirá la venta de terminales portuarias a gobiernos extranjeros"* (NYT 21/02/06).

Mientras tanto, las principales asociaciones empresariales se manifestaron en contra de cualquier medida limitante a la circulación del capital. La Business Roundtable, National Association of Manufacturers y la Emergency Committee for American Trade enviaron 7 principios que deberían contener las reformas y recalcaron que el control debía quedar en manos del Departamento del Tesoro. Aunque fueron realizadas una vez conocida el fracaso de la operación, las declaraciones buscan alcanzar un equilibrio entre las necesidades del capital y las de sus fracciones. *"Nuevas leyes que perjudiquen la salud de nuestra economía en nombre de la seguridad nacional serían un grave error", dijo Bruce Josten, vicepresidente de relaciones gubernamentales de la Cámara de Comercio"* (WSJ 10/03/06).

## Los ejes del equilibrio

Existieron en la UE intervenciones anteriores para frenar adquisiciones, pero más bien se trató de casos puntuales. Las OPAs de Novartis contra Sanofi (Francia, 2004), PepsiCo contra Danone (Francia, 2005), Procter and Gamble contra Nivea (Alemania, 2003) fueron vistas como excepciones dentro de la tendencia general a la concentración y centralización de capitales. Quizá las maniobras francesas son más habituales y responden a una especie de pánico por el "desembarco" de extranjeros sobre sus empresas. *"La salud de las empresas francesas es un placer para los ojos. Los 84.000 euros de beneficios que ellas acumularon el año pasado muestran que ellas tienen su rango y que esta mundialización que tanto se teme sirve para el crecimiento (...) Pero si las grandes empresas francesas nunca han ganado tanto, tampoco han sido nunca tan vulnerables. La loca actividad bursátil de principios de*

*año muestra que, después de años de relativa calma, un verdadero mar de fondo se está produciendo (...). Si la alerta fue dada el año pasado por Danone, codiciada por PepsiCo, ahora Arcelor enfrenta la embestida de Mittal y Suez la de Enel. Una curiosa alerta reina en torno a Société Generale, de la que se dice que será el próximo almuerzo del Citigroup, expresión apenas exagerada si se tiene en cuenta que el gigante americano gana por año, él solo, algo más que todos los bancos franceses juntos, y que su cotización en bolsa es cuatro veces la de la Societe. ¿Qué decir de Carrefour, de Lafargue, de Saint-Gobain, de Schneider, de Thomson, de Vivendi...? Todas presas potenciales. Desgraciadamente para ellas, el patriotismo económico no podrá salvarlas a todas” (LF 16/03/06).*

De lo antedicho, se desprende que, en la UE, la capacidad productiva de las empresas aún precisa crecer para responder al tamaño potencial de los mercados ampliados con la integración continental. La forma de crecimiento es por medio de las fusiones de empresas, pues cada una de ellas tiene tamaño relativamente similar y, como vimos, apoyos políticos suficientes para calificar a cada una de las empresas de los distintos países como la conductora del proceso. La disputa por la conducción es importante, no sólo en términos de mayores ventajas en la acumulación —porque agrega a los dividendos de sus accionistas la retribución por el desempeño de sus directivos— sino por las decisiones de inversión, que son políticamente sensibles, pues involucran la radicación de la fuerza de trabajo en los estados nacionales —que no niegan el *supra estado* sino que lo afirman porque son su condición de existencia—, en un contexto de desempleo crónico.

La situación es diferente en EE.UU., allí *“la oposición creciente en el Congreso estadounidense es comparable a la oposición a las adquisiciones realizadas por empresas japonesas a fines de los años '80 y principios de los '90. En esos momentos, en gran medida debido al reciclaje del amplio superávit comercial de Japón frente a EE.UU., empresas compraron participaciones de control en activos codiciados, como el Rockefeller Center, en Nueva York, el famoso campo de golf de Pebble Beach, oficinas en Los Angeles y varios hoteles en Hawái, muchos de los que posteriormente volvieron a manos estadounidenses a precios más bajos”* (WSJ 23/02/06). Al parecer, se trata de un fenómeno cíclico y, al no controlar completamente las decisiones de las empresas compradoras, permanente. En EE.UU., la capacidad productiva ya superó largamente el tamaño del mercado, debiendo desbordarlo hacia el exterior. Las posibilidades de ampliación del mismo son políticamente poco factibles (ALCA) o económicamente poco significativas (CAFTA). Con lo cual las fusiones se realizan con mercados ya saturados y sin posibilidades de expansión. Además, dentro de las mismas, se generan controversias que involucran empresas de países con relaciones conflictivas con EE.UU. o que comprenden a ramas estratégicas. Entonces, al reorganizar los procesos de producción a escala mundial para sostener su productividad, las empresas de EE.UU. permitieron la formación de capital en los espacios donde se instalaron y, producto de la mundialización, no pudieron evitar que retorne al espacio de acumulación donde

reside el mayor mercado mundial. Así, *“la propuesta de compra de 6.800 millones de dólares de una compañía británica, que opera puertos en EE.UU., por una compañía estatal de Dubai, al igual que la oferta bloqueada en 2005 de la petrolera china CNOOC Ltd. por Unocal Corp., representan la otra cara de la moneda del déficit estadounidense. Es el último ejemplo de la próxima ola de inversión extranjera en Estados Unidos: la compra de activos duros por parte de los países emergentes como China, Rusia, India y los productores de petróleo de Medio Oriente, que tratan de reciclar su riqueza en dólares y convertirla en algo más que bonos del Tesoro estadounidense. La necesidad de capital foráneo está impulsada principalmente por los grandes déficit de EE.UU. con el resto del mundo, que actualmente superan los 700.000 millones de dólares”* (WSJ 23/02/06).

Existe entonces una correlación entre el proceso de reorganización productiva y el flujo de inversiones: el rol que tuvo Japón en los '80 y '90 hoy lo comienzan a ocupar otros países. *“Las reservas extranjeras de los mercados emergentes, que se situaban en 727.000 millones de dólares en 1999, han aumentado a 2,4 billones, según el FMI. Se espera que la Reserva Federal suba las tasas de interés en EE.UU. en al menos medio punto porcentual adicional. El BCE podría hacer lo mismo. La semana pasada, Japón también indicó que se dispone a elevar las tasas por primera vez en varios años”* (WSJ 13/03/06). Esto último puede tener efectos contratendenciales, pues el nivel de las tasas de interés son importantes para los procesos de concentración y centralización, no sólo porque muestran el atractivo de las colocaciones financieras en los distintos espacios sino porque cualquier compra se realiza con la contribución de los mercados de capitales, y esto puede tener efectos aceleradores para aquellas empresas que dispongan de proyectos de inversión.

Ésta es la razón por la que *“el año pasado, empresas de Medio Oriente, América Latina, Asia y otras regiones gastaron más de 42.000 millones de dólares en adquisiciones en Europa, donde se han fijado especialmente, más del doble que en 2004. En lo que va de 2006, han anunciado acuerdos por 9.300 millones de dólares, cifra que supera el total gastado en todo 2003. En EE.UU., las empresas de mercados emergentes invirtieron en 2005 más de 14.000 millones de dólares, en 96 adquisiciones, superando el récord anterior de 10.000 millones de dólares establecido en 2000. Por ahora, las compañías tienden a centrar sus compras en industrias que conocen. Por ejemplo, la mexicana Cemex SA incursionó con fuerza en el mercado de cemento europeo con su compra por 4.100 millones de dólares, en 2004, del británico RMC Group PLC”* (WSJ 14/02/06). Pero estas fueron sólo una pequeña parte de las operaciones: *“En los últimos 12 meses, las empresas alrededor del mundo han anunciado 1,06 billones de dólares en adquisiciones transfronterizas, lo que representa un aumento de los 627.000 millones del año previo, de acuerdo a datos de Thomson Financial”* (NYT 28/02/06). No es casual que sean justamente las que enfrenten mayores dificultades para su concreción. Veremos con el tiempo los efectos de la decimocuarta elevación de tasas consecutiva en tan sólo diez meses, dispuesta por la Reserva Federal, que la llevó de 4,5% a 4,75% (WP 29/03/06).

## América Latina

Una vez más la región vuelve a ser noticia por las disputas y peleas en torno del acceso a los mercados nacionales y/o regionales. Esta pelea toma forma en estos días en la firma o rechazo de los Tratados de Libre Comercio (TLC), que establecen los marcos jurídicos para la apertura comercial y la libre circulación de mercancías.

Ante la imposibilidad de implementar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que estaba previsto para el 1 de enero de 2005, y ante los intentos infructuosos de lograr un relanzamiento del mismo por parte de EE.UU. en la última Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata (por la oposición del MERCOSUR y Venezuela), el impulso de los TLC bilaterales o regionales es la nueva estrategia de EE.UU., así como de las burguesías locales más poderosas.

La experiencia realizada con México y Canadá, así como la reciente firma con los países centroamerica-

nos, y anteriormente con Chile, son los antecedentes más palpables de la posibilidad de establecer estos acuerdos.

En estos días la región andina es la que está apresándose a esta nueva batalla. La relación de fuerzas dentro de cada país determinará el rumbo final de los acontecimientos tanto en Perú, como en Colombia y Ecuador.

Pero también fuera de la región andina hay intentos por implementar estos TLC. De esta forma, el MERCOSUR tampoco está exento, ya que Uruguay estuvo coqueteando estos últimos meses con la firma del TLC con la principal potencia mundial. Sin embargo, las críticas que trae en sus filas un posible acuerdo frena toda posibilidad de que en el corto plazo se llegue a un acuerdo entre ambos países.

### **Pelea por las Ganancias**

#### **NAFTA: el precursor**

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) que se creó en 1994 fue uno de los precursores en materia de libre comercio y tuvo como objetivo la creación de una zona de libre circulación de mercancías e inversiones entre EE.UU., México y Canadá.

El discurso hegemónico por ese entonces auguraba que el aumento del intercambio comercial permitiría asegurar el crecimiento de los países miembros, factor que México tomó como central en su política económica de los últimos doce años. De esta forma, el aumento de su Producto Bruto Interno –PBI– estuvo en relación directa con el aumento de las exportaciones, que crecieron de manera extraordinaria, ubicándose entre los diez mayores exportadores del mundo y el primero de Latinoamérica. Pero, si bien el aumento de las exportaciones habían sido espectaculares, las importaciones no se quedaron atrás, aumentando aún más que las primeras, produciéndose un déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente que hoy representa un 2% del PBI.

Sin embargo, buena parte de esas exportaciones fueron acaparadas por un reducido grupo de grandes empresas (tanto en el campo como en la ciudad) y por la proliferación de la industria maquiladora (asentadas en la frontera con EE.UU. donde las condiciones de trabajo son las más precarias, primando los bajos salarios, la falta de cobertura y la carencia de derechos laborales). Lo que hacen, principalmente, las maquilas es ensamblar las partes producidas en EE.UU. agregándole muy poco valor al producto final.

El acceso al mercado norteamericano, histórico para México dado su cercanía, sumado al libre comercio

firmado hace 12 años, generó la impresión (en los primeros años del NAFTA) de que la producción mexicana tendría entrada segura al principal mercado de consumidores del mundo.

Sin embargo, la situación empezó a modificarse en este nuevo siglo.

Las maquilas empezaron a trasladarse a Asia (sobre todo a China que es el segundo proveedor a EE.UU. a partir de 2003) y a países centroamericanos. El nivel competitivo mexicano cayó en el último sexenio del presidente liberal Vicente Fox, y la brecha entre ricos y pobre se empezó a agrandar de manera considerable: *"La manufactura que México está construyendo en este momento está tendiendo a crecer a una velocidad muchísimo menor que la viene de otros lugares como Indonesia, China o Malasia"*, apuntó Alberto Bernal, analista de Bear Stearns (6/1/06 El Universal de México. De aquí en adelante EUM)

La producción en el campo fue acaparada por las grandes transnacionales que eliminaron al pequeño productor. Durante 2005, las importaciones mexicanas de productos del sector agroalimentario provenientes de EE.UU. y Canadá ascendieron a 11.600 millones de dólares. El aumento en 12 años fue de 188.7%. Entre estos productos destacan habas de soja, maíz amarillo, algodón, trigo común, granos trabajados de maíz, tortas y residuos de la extracción de aceite de soja, sorgo para grano, grasa de animales, trigo y morcajo, principalmente. Más de 50% de estas importaciones corresponden a bienes intermedios necesarios para la producción mexicana.

Cabe destacar que para enero de 2008, los productos agropecuarios como maíz, frijol, jugo de naranja, leche en polvo y azúcar quedarán libres de arancel. Ante la necesidad de verse invadidos por los productos norteamericanos, sobre todo de maíz que es el principal

producto de consumo masivo, México pidió una revisión del tratado original, que fue denegado por EE.UU. y Canadá. Antes de la firma del NAFTA, México era uno de los pocos países que tenía "Soberanía Alimentaria", es decir, que no dependía de otros países para abastecer de alimentos a su mercado interno. Hoy por hoy, está importando productos de todo tipo, por lo que la eliminación de los pequeños productores generó la dependencia de esos productos importados.

Por otra parte, el sistema de exportaciones montado por México a partir del NAFTA no alcanza para lograr el crecimiento sostenido de su PBI, por lo que los principales economistas que otrora apoyaban la apertura indiscriminada de las fronteras comerciales están llamando a una revisión de la estrategia comercial. Hoy en día las exportaciones mexicanas no alcanzarán para lograr el 7% de crecimiento de su PBI que le permita incorporar a la mano de obra necesaria que cada año ingresa al mercado laboral (1,2 millones de personas). El gobierno esperaba que el sector exportador impulsara el consumo y la economía en general en 2006, pero sus cifras y las de analistas apuntan a que el empuje sería mínimo y la economía crecería 3.5% a tasa anual, un desempeño similar al de 2005: *"El crecimiento de la economía mexicana en 2006 va a acelerarse muy levemente. La economía mexicana debería estar creciendo a 5 o a 6%, entonces aquí no hay nada que celebrar"*, terminó afirmando Bernal.

La apertura y el cambio estructural también modificaron la dinámica de las manufacturas. En 2006, los sectores que crecerán más rápido que el PBI promedio (según estimaciones 3.1%) son: transportes y comunicaciones (6.0%); servicios financieros (5.6%); comercio, restaurantes y hoteles (4.5%); y construcción (3.4%). Se anticipa que las manufacturas aumentarán sólo 1.9% este año (24/2 EUM).

Durante esta transformación desaparecieron empresas en todas las actividades o, si sobrevivieron, tuvieron que cambiar de raíz. Los sectores más afectados en 2005, por citar algunos ejemplos, fueron la confección de prendas de vestir (desaparecieron 165 establecimientos), materiales y accesorios eléctricos y electrónicos (54), y otras industrias manufactureras (32 establecimientos). Un ejemplo claro es el de calzado y cuero: se cerraron siete establecimientos y su valor agregado se redujo 14% (24/2 EUM).

**Cambios económicos en el área andina: consolidación política de unos, debilidad política de otros**

### **Colombia: fortalecimiento político de Uribe da vía libre al TLC**

Antes de verificar los pasos en la implementación del TLC en este país, es necesario, en primera instancia, analizar los resultados de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en el mes de marzo. Las mismas tienen una importancia crucial ya que le dieron a Uribe

la cantidad de votos necesarios para impulsar un acuerdo de libre comercio con EE.UU., principal aliado en materia política y de seguridad con que cuenta este país.

Enmarcadas en una nueva ley electoral, se realizaron, el último 12 de marzo, las elecciones legislativas. Esta nueva ley electoral implementa: la participación de sólo una lista por Partido, con un candidato o varios candidatos. Estos deben plena subordinación a los intereses de su Partido (Ley de Bancadas). Con la posibilidad del Voto Preferente, el elector no está obligado a votar por el primero de la lista, sino por el o los candidatos que considere oportunos dentro de la lista. Por primera vez es reconocido el Voto en Blanco, si este asciende a más del 51% se debe repetir la elección. Nada dice la nueva ley sobre el abstencionismo.

Los Resultados muestran que con 10.780.668 votos efectuados, en un padrón de 26,5 millones (sobre 46 millones de habitantes; es decir, la abstención alcanzó el 60%), la coalición que acompaña al presidente Uribe logró la mayoría en ambas Cámaras, descomponiéndose de la siguiente manera la distribución de bancas en el senado: 20 bancas obtuvo el Partido Social de Unidad Nacional ("U"); 18 el Partido Conservador; 15 Cambio Radical; mientras que 5 bancas consiguió Alas Equipo-Colombia y 3 Colombia Democrática. La sumatoria de esas 61 bancas le posibilitan contar, a la Alianza de partidos gobernantes, con la mayoría de las 102 bancas. La oposición se quedó con 17 bancas que consiguió el Partido Liberal, las 11 del Polo Democrático, las 2 del Movimiento Mira, entre otros partidos menores con representación. En la Cámara Baja la mayoría también fue para la alianza que encabeza Álvaro Uribe.

El Polo Democrático evaluó, debido a los altos índices de abstención, que: *"el ganador fue la abstención, el uribismo se convirtió en la primera minoría más grande"* (ET, 16/3). A la vez, mostró que la necesidad de la Reforma de la Ley Electoral, de diciembre de 2005, era aglutinar y fortalecer los partidos oficialistas.

### **Fin del Bipartidismo**

Históricamente (hace 150 años), el Partido Liberal y el Conservador se reparten los cargos del Gobierno del Estado colombiano. Los resultados de la última elección nos muestran que el Partido Social de Unidad Nacional fue el más votado. Este partido agrupa a miembros de la vieja política, con diversas ideologías, que no quieren perder los espacios de poder.

Recordemos que Uribe rompe con el Partido Liberal, llegando a la presidencia en 2002, enfrentado al candidato oficial de su ex partido, Horacio Serpa. Desde entonces, en alianza partidaria, se dedicó a la construcción, aún embrionaria, de un Partido Nacional (conformado por cuadros del conservadurismo y de la disidencia liberal), que en las prácticas de gobierno mezcla un alto grado de autoritarismo, una alta dosis de liberalismo económico y "premios" de Estado Bene-

factor. Estas incoherencias descansan en la justificación de garantizar seguridad y orden.

El tercer lugar que consiguió el Partido Liberal, hasta aquí mayoría en la Cámara Baja, es la manifestación de la crisis del mismo. Hoy muchas de sus figuras históricas se encuentran en la "U" o en Cambio Radical. Germán Vargas Lleras, el Senador más votado y jefe de CR, presionó: *"una vez concluya la campaña presidencial deben reconocer que Uribe es el líder del Liberalismo... deben reconocer que es liberal y cambiar su actitud."* (14/3).

### Sinuoso Camino al TLC

Luego de dos años de negociaciones entre Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, la firma del TLC de Colombia del 27 de febrero, a la que se suma la realizada por Perú en Diciembre último<sup>1</sup> (ver más abajo), conlleva a una presión política muy fuerte para el gobierno ecuatoriano, ya en momentos de definición sobre la aceptación o rechazo de este acuerdo.

El representante del FMI, Rennback, afirmó que la firma del tratado es una ganancia para Colombia, ya que siempre es bueno contar con un socio tan grande como EE.UU., y sobre todo para un país que exporta productos agrícolas la ampliación del comercio abre posibilidades de una mayor exportación, tal como vimos en el ejemplo con México. Pero el propio representante del organismo internacional advierte que si este acuerdo no es acompañado de medidas precisas, claramente puede aumentar la desigualdad. El Banco Mundial fue más preciso: *"si no se toman medidas aumentará la pobreza en Colombia"* (28/2 El Espectador Colombia).

En el sector industrial colombiano la firma fue bien recibida. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Luis Carlos Villegas, dijo *"esta es una buena herramienta para el desarrollo (...) garantiza la entrada de productos industriales colombianos sin arancel"* (El Espectador 28/3). En tanto el presidente de la Federación Nacional de Productores de Cereales, Luis Quintero, concluyó: *"el balance es muy negativo para Colombia (...) Colombia obtiene un acceso de 50 mil toneladas de azúcar y 4 mil de tabaco al mercado de EEUU y aceptando importar 5 millones de toneladas agrícolas"* (El Espectador 28/3).

Rápidamente, Uribe salió a aclarar que estos números no son deficitarios ya que la mitad de estas toneladas son de maíz, producto que Colombia no produce en cantidad; también agregó que con el TLC se debe comprar lo que no se produce, garantizando la compra de la producción nacional. El Ministro de Agricultura, Andrés Arias, anunció un paquete de medidas de apoyo a los pequeños productores, campesinos de la fruta, las flores, el café, el tabaco, etc. Sin embargo, el presidente

<sup>1</sup> Este tratado aún no está ratificado por el Congreso. Al cierre de esta edición, el Presidente Toledo se pronunciaba a favor de dejar en manos del próximo gobierno la ratificación del Tratado.

de la Federación de Avicultores fue contundente, *"los subsidios y las ayudas no solucionan una distorsión del consumo como la que genera el TLC"* (El Espectador 28/2).

### Peligra la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

El Ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, aseguró que el TLC compromete la existencia de la CAN. En concreto, mostró su miedo por lo que significaría la pérdida de la exportación de soja (500 mil toneladas que equivalen hoy a 165 millones de dólares) que anualmente Colombia compra a Bolivia. Con optimismo informó que Brasil dio claras señales de adquirir esta exportación.

A la aprobación de este tratado todavía le falta transitar los espacios legislativos (en julio de 2006, ya con los nuevos senadores y diputados) de mayoría Uribista. Finalmente, la Corte Constitucional (últimos meses de este año) tendrá que ratificar lo acordado.

### Rumbo a las presidenciales

Estos cambios en lo político y en lo económico no hacen más que fortalecer el camino de la reelección de Uribe y su sueño de Partido Nacional.

A este proyecto de País se le opone el del Partido Liberal, que en las elecciones legislativas (en internas abiertas) midió sus candidatos de aquí al 28 de mayo. De cinco propuestos, el elegido fue el ex Presidente Horacio Serpa, aunque cabe aclarar que los otros tres candidatos juntos sumaron más votos y le exigen que renueve el Partido bajándose de la candidatura. Por ahora no lo hizo. Su propuesta presidencial se basa en lograr un nuevo estatuto laboral —que esta congelado desde 1991—, para lo cual señaló: *"le daré personería al pueblo. Habrá un nuevo modelo de lucha contra la desigualdad"*, (ET 26/2). La solución política al conflicto armado<sup>2</sup> es otra propuesta. Finalmente, concentrará energía en la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), tratando de oponer esta fuerza a los tratados de libre comercio que impulsa Washington.

### Ecuador: se fortalece la oposición indígena y traba la firma del TLC

El 24 de marzo, a diez días de comenzar la última ronda de negociaciones por el TLC, una fuerte movilización indígena que comenzó en las provincias de Cotopaxi e Imbabura se extendió rápidamente a

<sup>2</sup> En uno de los últimos comunicados del Secretariado del Estado Mayor de la Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC 29/12/05) acusan al Gobierno del Estado colombiano de no mostrar reciprocidad en el intercambio humanitario (exigen 55 rehenes en manos de las FARC por 500 combatientes), ya que sigue obstinado en la liberación a sangre y fuego bajo el Plan Patriota.

España, Suiza y Francia ven la imposibilidad de un acuerdo humanitario. Lo dificulta, dicen estos países europeos, por un lado la manipulación de Uribe y por otro la intransigencia de la FARC.

siete provincias más, cortando las arterias fundamentales de circulación de productos.

Agrupados en la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE, agrupa la mayoría de las etnias originarias), los movilizados plantearon sus demandas: que el Gobierno del Estado se pronuncie contra la guerra en Irak; retirarle la base de Manta a las fuerzas de EEUU; la expulsión de la petrolera estadounidense Occidental y nacionalización del petróleo; la convocatoria a una Asamblea Constituyente; y realizar una Consulta Popular sobre el TLC.

El Prefecto de Cotopaxi, Cesar Umajinga, justificó su apoyo a la paralización de la provincia, ya que *"Ecuador es pequeño, no estamos preparados para ese mercado ampliado"* (El Universo 13/3). Para la embajadora norteamericana, Linda Jewel, es injustificado el pesimismo ecuatoriano: *"Ecuador es dos veces más grande que cualquier otro que firmó el CAFTA"* (Sólo Salvador ratificó el TLC que firmó, en 2004, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y República Dominicana), *"y a pesar de que es pobre, no es más que Nicaragua o Guatemala, que ya han firmado"* (El Universo 13/3).

A medida que crecía la protesta, el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, caracterizaba la situación *"el país esta en una verdadera convulsión (...) vamos camino a la anarquía, seguramente a la disolución"*. El portavoz del presidente trato de ser mas claro: *"El Mandatario es víctima de una componenda entre líderes indígenas y políticos radicales, que buscan su salida y atentan contra el sistema democrático"*. Antes de ser removido de su cargo, el Ministro de Gobierno, Alfredo Castillo, fue más realista al aclarar que si el régimen *"no se subordina en silencio a los pedidos del pueblo, simplemente se va"* (El Universo 14/3).

El nuevo Ministro de Gobierno, Felipe Vega, aseguró que el levantamiento no es contra el TLC, es una movida política del dirigente Luis Macas (de la CONAIE) en tiempos electorales. Macas<sup>3</sup>, que promueve una consulta popular sobre TLC, respondió: *"que se firme si sirve al Ecuador, pero no estamos dispuestos a que se venda el país, ni nuestra soberanía alimentaria, territorial y política"* (El Universo 21/3).

Jorge Guamán, diputado por el Partido Pachakuti, brazo político de la CONAIE, afirmó que si el Presidente Palacio firma plantearan el juicio político por traición a la patria.

### Delicada situación petrolera

La Oxy es la mayor petrolera de Ecuador. Desde hace un tiempo está sospechada de entregarle a la Compañía City, en un acuerdo privado que prohíbe la legislación, la explotación del 40% de sus derechos sobre suelo ecuatoriano. Recientemente, un perito ratificó el delito

con la verificación de la existencia de los documentos. De acuerdo a esto, el presidente de Petroecuador (estatal) mostró estar preparado para asumir el control de la explotación de la Oxy, pero condicionó la decisión de caducidad del contrato al Ministro de Energía y le recomendó que se ampare en la Corte Suprema de Justicia.

Al cierre de esta edición las movilizaciones indígenas planteaban un repliegue para organizarse mejor. Como balance rescatan haber instalado las demandas en la sociedad, logrando apoyo explícito de la Federación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (Fepassca), la Confederación de trabajadores de Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores y la Confederación Nacional de organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

## Perú: Elecciones y TLC

### Humala en primera pero todo se define en segunda (vuelta electoral)

Al igual que en Colombia, se llevará a cabo dentro de unos días las elecciones en Perú, que serán cruciales para que este país ratifique o rechace la firma del TLC.

Tanto para los medios peruanos como para las encuestadoras locales, es un hecho el empate técnico o la ajustada victoria de Ollanta Humala, del frente electoral Partido Nacionalista Uniendo Perú (PNUP), en las elecciones del 9 de abril. Esta situación conduciría a una automática segunda vuelta entre Humala y Lourdes Flores, candidata de la derechista Unidad Nacional (UN), ya que el ex presidente Alan García, de la socialdemócrata Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), si bien había subido en las encuestas en los últimos meses (véase *Análisis...* anterior), continúa tercero y con escasas posibilidades. Si ningún candidato saca el 50% de los votos (algo que desde 1980, cuando empezó a implementarse la segunda vuelta electoral, sólo alcanzó Fujimori en 1990), el 7 de mayo se enfrentarán en la segunda vuelta electoral los dos más votados en el primer turno.

A esa contienda ya se perfilan los candidatos, a los cuales no importa mucho los porcentajes que consigan en la primera porque todo el escenario electoral cambiará. El 28,8% de intención de voto a Humala contra el 24,4 % a Flores, medidos en una reciente encuesta de la Universidad Nacional de Ingeniería<sup>4</sup>, si bien afirma a Humala por primera vez como vencedor en primera

<sup>4</sup> Las encuestas abundan en los diferentes diarios de Perú y algunas arrojan datos muy cruzados. La que presentamos aquí parecería otorgar más confianza por venir del ámbito científico y por los números que tomaron para la muestra: fue tomada en 126 distritos de las 38 provincias de los 24 departamentos del país. Con el correr de los días, casi todos los diarios y encuestadoras, números más o números menos, confirmaban las tendencias esbozadas por esta encuesta y aseguraban el triunfo de Humala en la primera vuelta.

<sup>3</sup> Como Ministro de Agricultura de Lucio Gutiérrez del 15 de enero al 6 de agosto de 2003, inició las negociaciones para un TLC. Luego la CONAIE rompió relaciones con Gutiérrez y se retiró del gobierno.

vuelta no es un piso para tener en cuenta en la segunda. La mayoría de los candidatos, a pesar de sus diferencias políticas, coinciden en la oposición a que Humala llegue al Palacio de Pizarro (sede de gobierno). Lourdes Flores, Alan García y Valentín Paniagua (del Frente del Centro y cuarto candidato en las encuestas) ya están empezando a negociar un entramado de alianzas electorales para evitar que el candidato "nacionalista y populista" (como lo definen los grandes medios) hegemonice los resultados en el segundo turno electoral.

En ese sentido, ya comenzó una guerra mediática de parte de los opositores a Humala para intentar, a través de los medios, quitarle votos ante las novedades adversas que arrojaron las encuestas. Alan García lo acusó de que *"él y su agrupación constituyen una pandilla de políticos y de tecnócratas que se alquilan para llegar al gobierno"* (LR, 24/3). Además, aprovecharon declaraciones de su padre (la familia Humala tiene actividad en diversos frentes políticos, todos de tinte nacionalista, Issac, padre de Ollanta, es el líder del Movimiento Etnocaserista, del cual su hijo se separó para fundar el Partido Nacionalista, que integra el frente PNUP) sobre la necesidad de liberar al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Pero lo cierto es que las encuestas no retrocedieron y desde el día 20 de marzo hasta fin de mes, jornada tras jornada, subía uno o dos puntos y, de un virtual empate técnico, pasó Humala a claro ganador en primera vuelta, y en algunos casos a ganador en la segunda, aunque esto es todavía algo apresurado, dependiendo de las alianzas que se den luego de los resultados. El cardenal de Perú, Juan Luis Cipriani, acercó las posturas de la Iglesia, en esta carrera mediática de dividir aguas: *"No esperemos cambios por letreros en la calle. Se escuchan revoluciones y fórmulas mágicas (...). No hagamos caso al mesianismo"* (LR 20/03).

### Entre la primera y la segunda, el TLC en el medio

Ahora bien, los mercados no reaccionaron muy bien ante la novedad del triunfo electoral en primera vuelta, y el escenario incierto para la segunda. La caída del 4,08 % del Índice de Valores de la Bolsa de Lima parece ser una señal clara del temor de la oligarquía financiera limeña al proyecto de Humala en caso de acceder al poder, que consiste, entre sus principales medidas, en iniciar un proceso de Asamblea Constituyente que permita reformar la constitución hecha por el ex presidente Fujimori, vigente hoy día. Además, las consignas de revisión de todos los contratos con las empresas petroleras extranjeras y el rechazo al TLC impulsado por Toledo, son lo que explica la posible unión de todos los candidatos de la derecha y de la socialdemocracia.

Justamente, el día 7 de abril debería firmarse el TLC entre EE.UU. y Perú, pero la situación política hizo decir a fines de marzo pasado a Alejandro Toledo -y ante el conflicto en Ecuador por el mismo tema-, *"que si hay que postergar la firma del acuerdo lo revisaremos"* (C 25/3). Lourdes Flores y el ex presidente Alan García son partidarios del mismo, pero Ollanta Humala rechazó públicamente la firma del tratado bilateral.

### Un compás de espera entre EE.UU. y Uruguay

Por su parte, los miembros socios del MERCOSUR tampoco están exentos de las tentativas y las presiones desde dentro y fuera de los ámbitos nacionales para firmar un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. En este caso, Uruguay dio la sorpresa hace dos meses, cuando su ministro de Economía Danilo Astori, afirmó que estaba en los planes de su país firmar un TLC con EE.UU.

Rápidamente surgieron críticas dentro de Uruguay y del MERCOSUR, poniendo en jaque al mismo ya que se prohíbe expresamente una firma de libre comercio de cualquiera de sus socios con otros países que estén por fuera del bloque.

En el propio partido gobernante, el Frente Amplio, estalló el conflicto quedando a fines de esta edición la resolución sobre este tema, que ya se había votado en contra de la formación de un Área de Libre Comercio hace un par de años atrás en un plenario del mismo.

A estas idas y vueltas se le sumaron las declaraciones de Thomas Shanon, secretario adjunto de la casa Blanca para el hemisferio occidental, quién dejó en suspenso cualquier negociación: *"Lo que puede proveer el futuro (de las relaciones comerciales entre Montevideo y Washington) va a depender, primero del éxito que tengamos en lograr la ratificación del acuerdo con Perú y Colombia, y en cerrar acuerdos con Panamá y otros países andinos"* (C 10/3), para agregar que: *"un ALCA y los acuerdos de Libre Comercio con los países del MERCOSUR son una parte importante del futuro de EE.UU. y del hemisferio"* y agregó que *"Uruguay va a tener un papel importante que jugar en ese futuro"* (C 10/3).

Por su parte, el ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, trató de poner paños fríos en la disputa al interior del Frente Amplio, asegurando que Uruguay no intentará, por ahora, negociar un TLC: *"En el futuro se verá, pero no está en este momento en nuestra agenda ni en la agenda de EE.UU."* (C 10/3).

La definición del Frente Amplio sobre este tema será crucial para determinar cuál será la posición de Uruguay con respecto al MERCOSUR y a la integración regional.

## Seguridad

### Doctrina Nacional de Seguridad versión 2006-2010

Las diferentes declaraciones sobre el papel y accionar de los países de la región quedaron plasmadas por escrito en el informe del presidente norteamericano George W. Bush ante el Congreso, en alusión a los nuevos alineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional que se renueva cada cuatro años. En esta oportunidad no hubo grandes cambios con la versión del 2002, redactada pocos meses después del 11 Septiembre, día del atentado a las torres gemelas.

En este documento, se ratifica la guerra preventiva y el accionar norteamericano en todo el mundo para defender los intereses de su país ante “enemigos” que no necesariamente utilicen el uso de la fuerza (pero que sí constituyan una “amenaza”). Irán apareció como el enemigo N° 1 de EE.UU. debido al desarrollo de su programa nuclear.

En el informe dos países sobresalieron de este continente: Cuba y Venezuela.

El primer fue catalogado como una dictadura “anti-estadounidense que continúa oprimiendo a su pueblo” (LN y C 17/3) y el segundo afirmando que Chávez es un “demagogo que flota en dinero del petróleo y está socavando la democracia y buscando desestabilizar a la región” (LN y C 17/3). Antes del informe, EE.UU. había vuelto a advertir a Venezuela por sus compras de armamento: “Estamos muy preocupados por la compra de armas que se está registrando en Venezuela”, ya que podría “aumentar la capacidad militar de Caracas” (C 1/3).

En el mes pasado, Bolivia tampoco estuvo exenta de presiones. El propio Evo Morales denunció presiones permanentes de la embajada norteamericana hacia su país: “Estoy recibiendo mucha agresión, mucha provocación por

*parte de la embajada de EE.UU.”* (C 9/3) en relación a la insistencia de este país para que sean devueltos equipos y tecnología militar que se había entregado a Bolivia para la lucha contra el narcotráfico. La decisión se tomó al conocerse que el coronel Rory Rodríguez se haría cargo de la Fuerza Contra Terrorista Conjunta (FCTC). Rodríguez está acusado de informar a Morales en plena campaña de éste a la presidencia del desvío de misiles del ejército boliviano a EE.UU. para su desmantelamiento.

Por su parte, fuertes fueron las críticas que recibieron Argentina, Paraguay y Brasil sobre el control de la Triple Frontera. El secretario adjunto del tesoro para la lucha contra el financiamiento del terrorismo, Patrick O'Brien, resaltó: “*Claramente las irregularidades que existían en ese momento (en el 2001) continúan presentes, y todavía hay actividades de financiamiento del terrorismo*” (C 10/3).

La respuesta de los funcionarios del gobierno argentino fueron tajantes: “Las políticas para combatir el lavado de dinero no pueden imponerse de manera autoritaria ni impartirse desde terceros países” (C 10/3), afirmó Martín Redrado, titular del Banco Central de la República Argentina, en el marco de la Cumbre Regional de Prevención del Financiamiento del Terrorismo.

Por su parte, el ministro del interior, Aníbal Fernández, declaró que: “esas cosas no hay que decir las, hay que demostrarlas y señalar a los responsables. Nos referimos a un país o no decimos nada. Dígame de dónde sale el financiamiento y después vemos qué hacemos” (C 11/3).

Sin embargo, los tres gobiernos decidieron actuar conjuntamente con EE.UU. para formar unidades que mejoren la transparencia comercial, y evitar de esa manera el lavado de dinero.

## Argentina

El 12 de marzo, el editorial de La Nación señalaba el "llamativo silencio que se han autoimpuesto sectores empresariales que discrepan con algunas políticas del gobierno nacional o el acompañamiento a algunas iniciativas legales del Poder Ejecutivo por legisladores nacionales", arengando a estos sectores "a confiar en nuestra capacidad para influir sobre los acontecimientos de orden general con nuestras opiniones, con nuestras decisiones, con nuestra acción" (LN 12/3).

Intentaremos aquí dilucidar el reclamo hecho desde La Nación, a través del análisis de los posicionamientos referidos a los principales hechos económicos ocurridos durante marzo: *lucha por la distribución de la riqueza, reesta-*

*tización del servicio de agua potable y cloacas, y control de la producción y distribución en la rama de las carnes rojas.*

Asimismo, dos advertencias -una realizada por Mariano Grondona y la otra por el editorialista del diario Clarín- nos permitirán articular en nuestro análisis los distintos conflictos parciales que se vienen sucediendo en nuestro país y que no permiten a la "clase política" estabilizar el sistema democrático representativo.

Analizaremos, a su vez, lo ocurrido en tomo de la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado de 1976, a través de los diferentes posicionamientos realizados desde las Fuerzas Armadas, la Iglesia, y la Presidencia de la Nación.

### **Pelea por las ganancias**

#### **La consolidación de un esquema cada vez más desigual y las presiones en contra**

En anteriores *Análisis...* afirmamos que, a medida que la economía nacional crece (aumentos récord en los ítems producción, exportación, importación), aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso. Así, mientras la economía atraviesa el momento *ascendente* de su ciclo, se **consolida un esquema de distribución de la riqueza cada vez más desigual**: en el tercer trimestre de 2005 el 10% más rico de la población obtuvo **31 veces más ingresos** que el 10% más pobre. En 1974, esa distancia era de 5 veces; en 1994, de 18; en el segundo semestre de 2004, de 28. En otras palabras (o cifras), en la actualidad, mientras el 10% más rico gana en promedio \$3.268, el 10% más pobre recibe \$106.

Observado de otro modo, podemos decir que tan sólo un 20% de la población que recibe ingresos se queda con el 53,6% de la riqueza producida.

Considerando el ítem "*asalariados*", si estos obtenían en 1993 más del 37% de la producción, en 2005 sólo se hacen con poco más del 26% (todos los datos en LN 12/3).

Sin embargo, esta tendencia general de la concentración del capital -que en rigor se desarrolla a nivel mundial- y su consecuente "inequidad" en la distribución de las riquezas producidas socialmente, ha sido enfrentada por las presiones de la clase obrera y de la propia lucha entre las fracciones del capital en la Argentina, cuya brecha ha dado lugar a que la presión de los trabajadores se pueda realizar.

Expresión de ello es, por un lado, que el 44% de un total de 142 grandes empresas han comenzado a negociar salarios con sus trabajadores (consultora Sociedad de Estudios Laborales, P12 8/3). Pero también el propio gobierno del Estado, como expresión de una *alianza social* que incluye a una fracción de los trabajadores, ha traducido en determinadas medidas a favor del *trabajo* esta compleja relación de fuerzas.

Así, tras las presiones de distintas fracciones de la clase obrera (desde la propia CGT hasta sectores disidentes, enfrentados con la conducción sindical como por ejemplo los petroleros de Las Heras), el gobierno au-

mentó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, beneficiando a unos 500.000 trabajadores. En segundo lugar, el Senado dio carácter de ley al proyecto del Poder Ejecutivo que establece como **prioridad** el pago a los trabajadores en caso de quiebra de una empresa, aun antes que al resto de los acreedores. Como tercer punto, tras un acuerdo con la CGT, el gobierno aumentó por decreto el monto del seguro de desempleo, pasando de entre 150/300 pesos mensuales a 250/400 pesos, según su antigüedad. En cuarto término, Diputados aprobó una serie de cambios en el régimen laboral, como permitir a un trabajador dirigirse a la Justicia ante una modificación aplicada por la compañía sobre las condiciones de su trabajo; mientras, en la misma Cámara, la comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el hombre de la CGT (y diputado del kirchnerismo) Héctor Recalde, propuso la eliminación de los topes a la indemnización.

Aquí cabe resaltar que todas las medidas tomadas o proyectadas benefician a una fracción determinada de los trabajadores: los que se encuentran registrados ("en blanco"). No es un detalle que poco menos de la mitad de los asalariados se encuentran fuera del registro ("en negro").

Por otro lado, la manifiesta oposición de todas las *expresiones del capital* (con excepción de la pequeña y mediana burguesía local agrupada en CAME) a cualquier medida de distribución del ingreso favorable a los trabajadores y el pueblo en general, se explica por el hecho de que el *aumento de la competitividad* de los capitales en el país se basa en el crecimiento de la explotación de la fuerza de trabajo. La llamada recuperación económica (y el crecimiento de la economía en general) después de la crisis que estalló a finales de 2001 y se mantuvo durante todo el 2002, tuvo y tiene como fundamento no tanto la inversión en tecnología y maquinaria para la producción, sino más bien la creciente explotación del recurso *trabajo*. La expresión más directa de esto ha sido la disminución del "costo de la mano de obra", que por ejemplo explica la reducción en la participación de la riqueza social de los trabajadores (y la masa del pueblo en general), tal como vimos al principio de este apartado.

El necesario **avance** del *capital* sobre el *trabajo* fue definido claramente por el economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, Francois Bourguignon, quien dijo, con aparente vulgaridad y manifiesta amenaza, sobre la posibilidad de distribuir más equitativamente el ingreso que *"Si se intenta pasar algo del bolsillo de una persona a otra, es posible que haya algún escape y se destruyan los incentivos a la producción"* (P12 8/3).

La denuncia frontal a la política oficial en esta materia la hizo La Nación a través de su editorial, cerrando marzo con la siguiente síntesis: *"Los cambios impulsados en el Congreso a la legislación laboral representan un paso atrás al reintroducir cláusulas que tendrían como consecuencia el aumento del costo para las empresas. [Esto] instala la sensación de cambios permanentes en las reglas de juego justo en momentos en que la Argentina debería afianzar la seguridad jurídica. Se retorna de este modo a una lamentable tradición en nuestro país de desandar caminos ya consolidados por anteriores administraciones, sin medir las consecuencias negativas que provoca para el futuro del país"* (LN 31/3).

### La recomposición de las funciones del Estado nación (I): la reestatización de Aguas Argentinas

#### Los acuerdos parciales

En la primera semana de marzo, Telecom cerraba con el gobierno un acuerdo de mediano plazo, comprometiéndose a suspender (con intenciones de abandonar, si todas las condiciones pautadas se cumplen) las demandas presentadas ante el tribunal internacional del Banco Mundial, CIADI, y a invertir 1.000 millones de pesos en 2006, según el anuncio del presidente de la empresa, Amadeo Vázquez, *"como parte de un plan global plurianual de 3.000 millones de pesos"* (C 7/3). Por otro lado, Telecom recibía de parte del gobierno el reconocimiento de que la empresa ha cumplido *"aceptablemente con sus obligaciones"* (LN 7/3) y – de la misma manera que su competidora Telefónica – un acotado *aumento tarifario* en el bloque horario de 20 a 21 horas, así como la dolarización de las comunicaciones que se realizan desde el exterior (carga que debe pagar quien realiza la llamada).

Al mismo tiempo, se reeditó el compromiso que el gobierno ha forjado con el grupo español Repsol. Expresión de la fracción de capital financiero que, en la lucha en el "territorio" privatizado de los recursos estratégicos y las comunicaciones, se ha alineado junto al gobierno argentino, Repsol declaraba, en la voz de su director general, Enrique Locutura, que el esquema de los precios internos de los combustibles *"es sostenible en el tiempo"* y que la empresa *"va a seguir acompañando al Gobierno en su lucha contra la inflación"* (C 18/3).

Cerrado el "acuerdo" con esta fracción del capital más concentrado a escala mundial, una de las fracciones de capital más concentrado a nivel nacional avanzó sobre un recurso estratégico como el agua, **reponiendo funciones del Estado nación**, al rescindirle el contrato a la compañía Aguas Argentinas.

#### La reestatización de Aguas Argentinas

La disputa con la empresa francesa Suez, principal accionaria de Aguas Argentinas, desplegada de manera creciente desde la segunda mitad de 2005, llegó a su punto más alto el mes pasado cuando el gobierno dio el paso que toda una fracción del capital en el país considera abominable: la reestatización del servicio de agua potable y cloacas.

El hecho incluyó las más duras expresiones de un lado y del otro. Por la defensa de la estatización de Aguas se manifestaron los principales cuadros del gobierno del Estado y la dirección sindical de la rama, sin que ninguna expresión directa del capital en el país se posicionara públicamente en este sentido. Su silencio, sin embargo, resulta en apoyo tácito a las medidas adoptadas por el gobierno del Estado.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dio a conocer la medida oficial sobre "la cuestión Aguas Argentinas" al tiempo que denunciaba a la empresa: *"El incumplimiento de la concesionaria registra tal persistencia y afecta garantías tan primarias de los usuarios que (el Estado) se ve obligado a rescindir el contrato de concesión por culpa del concesionario"* (LN 22/3).

Desde el sindicato de Obras Sanitarias, su titular, José Luis Lingeri, celebró la medida marcando la estrategia de una *fuerza social* que requiere la recomposición de determinadas funciones del Estado, desbaratadas durante la década del noventa: *"Volvemos al Estado, pero a un Estado que invierta, como se comprometió el presidente Néstor Kirchner (...). Se acabó el Estado bobo cuando íbamos 10 a cambiar un caño y 4 se dedicaban a hacer el asado. Ahora viene el Estado inteligente"* (LN 22/3). Expresando esa *fuerza* o *alianza social* a la que acabamos de hacer mención (y que trataremos de determinar mejor más adelante), el dirigente gremial, cabeza de la CGT conducida por Hugo Moyano, explicitaba significativamente el lugar *subordinado* que la fracción de capital más concentrado le reserva en dicha alianza: *"Los trabajadores no tenemos vocación de poder, queremos poner el hombro a quien conduzca la empresa"* (C 22/3).

Simultáneamente, Kirchner, buscando consenso en las masas, aunque manifestándose hacia todo el capital en su conjunto, públicamente agregaba: *"Terminamos con un agravio y una injusticia (...). Durante 15 años se llevaron cientos de millones de ganancias mientras los argentinos tienen que rogar para que les den una gota de agua"* (C 23/3).

Hasta aquí, hemos visto que la defensa de la *intervención del estado nación* en aquellos "territorios" donde la disputa de intereses entre fracciones distintas del capital así lo exige, ha quedado en manos del personal político y de la dirección sindical.

Decididamente en contra de la política de estatización, donde el servicio de aguas se constituye como cuarto caso tras las experiencias del Correo, del espacio de comunicación satelital y de una línea del ferrocarril, se han pronunciado las siguientes representaciones:

Desde la Cancillería francesa, el vocero Jean-Baptiste Mattéi reclamó en nombre del gobierno de Francia que "se garantice la seguridad jurídica de las inversiones

francesas y que las instancias de arbitraje internacional puedan desarrollarse plenamente", con lo que confirmaba la continuidad del juicio contra el Estado argentino en el CIADI (C 23/3).

El mismo día, Clarín manifestaba en su editorial su particular disenso echando luz, entre otras cosas, sobre la posible sanción del capital internacional: "*se plantean varias incógnitas de importancia (...) qué repercusión tendrá en los inversores y gobierno extranjeros esta nueva cancelación de un contrato y avance en la estatización económica. Derivado de esto surge la pregunta de si el Gobierno seguirá este patrón con otros servicios privatizados. Finalmente, el recuerdo de las deficiencias de la gestión estatal provoca inquietud sobre el futuro del servicio y la calidad de la administración de los fondos públicos que se invertirán en el mismo*" (C 23/3).

Finalmente, La Nación, tribuna de la concepción liberal, intervino desde su línea editorial en términos casi idénticos a los de Clarín: "*La reestatización del servicio de aguas (...) era una salida probable, aunque no la ideal para una privatización controvertida desde su concreción, que debería completarse a la brevedad con el traspaso a un nuevo operador privado que garantice servicios de calidad y la ampliación de la red (...). Sería beneficiosa y una buena señal para potenciales inversores una rápida reapertura del proceso para dar nuevamente en concesión los servicios (...). La Argentina requiere más que nunca que las empresas vuelvan a confiar en el país, para lo cual son fundamentales las reglas de juego previsibles y el respeto por la seguridad jurídica*" (LN 23/3).

Puede observarse cómo, desde esta posición contraria a la estatización, tampoco las expresiones directas del capital intervinieron públicamente. Llama la atención el rol protagónico compartido por las editoriales de los dos matutinos más importantes de alcance nacional, sobre todo si consideramos al área metropolitana, La Nación y Clarín, y la coincidencia en sus líneas de intervención, habiendo aparecido enfrentados más de una vez en los diversos territorios de la lucha interburguesa.

Hemos visto entonces que el espacio público de la lucha entre fracciones del capital ha sido ocupado, tras el "corrimento" de las expresiones directas de la burguesía en el país (corporaciones, grupos económicos, voceros, etc.), por los representantes políticos (personal político) y los medios de comunicación. Esta situación lleva, tal como vimos en la introducción, a La Nación a realizar un llamado explícito a la intervención pública a las fracciones del capital que suelen expresarse a través suyo.

Sin embargo, en el caso que sigue (la disputa en lo referente al precio de las carnes) veremos cómo una serie de variados agrupamientos del capital pasaron a la acción en defensa de sus intereses particulares.

### La recomposición de las funciones del Estado nación (II): el control de las carnes

Hemos observado durante meses el ritmo creciente de la lucha por los precios, en donde las distintas fracciones del capital compiten "naturalmente" por el pauperizado mercado nacional y por los mercados regionales, y donde el movimiento obrero irrumpe con sus propios intereses aliándose con alguna de estas fracciones burguesas. En términos generales, el

gobierno desplegó una política de acuerdos con las distintas expresiones del capital con el objetivo de detener la tendencia creciente de los precios internos. El caso díscolo ha sido el de la carne, puesto que su precio no ha dejado de subir, incluso muy por encima del promedio, presionando hacia arriba a todos los ítems de la canasta básica.

Pero, de todas maneras, la disputa con los productores y distribuidores de las carnes trasciende el terreno de los precios.

### Primer momento: suspensión de exportaciones

Un dato que explica la tendencia alcista de los precios internos de las carnes es la enorme demanda externa generada tras la devaluación del peso. Entre enero de 2006 y el mismo mes de 2005, el **ingreso de divisas** por dichas ventas fue un **27% mayor**, aun cuando las exportaciones cayeron en igual periodo un 5% (C 4/3). En tanto el mercado interno mayorista (Liniers) acumuló un aumento del 22% en 2006, a pesar de los aumentos aplicados a las retenciones y las restricciones impuestas a las exportaciones de los productos cárnicos.

Por eso, el mes pasado el gobierno dio otro paso en la disputa con el campo, la industria de la carne y los grandes exportadores, al **suspender todas las ventas externas** de ese producto por 180 días, excepto la denominada cuota Hilton (cortes "caros" que se venden a la Unión Europea) y los tratados binacionales (como por ejemplo el rubricado con Venezuela), aumentando, además, del 5% al 15% las retenciones en las carnes con hueso o cocidas. Estas medidas eran explicadas por Kirchner: "*No nos interesa exportar a costa del hambre y el bolsillo de los argentinos. Está bien que ganen, pero primero vendan a los argentinos a precios que puedan comprar*" (C 9/3).

A partir de allí, distintas expresiones políticas y gremiales del capital y el trabajo se posicionaron, apareciendo como la base de sustento de las medidas oficiales, o como la de la oposición.

### Los posicionamientos en oposición a las medidas oficiales

Desde la Confederación Rural Argentina (CRA), su titular, Mario Llambías, sostuvo que "*el cierre de las exportaciones va a causar un gran desánimo y provocará una inmediata caída de la producción de carnes*" (LN 9/3), amenazando con descargar los costos sobre los trabajadores de la rama: "*esta medida puede tener serias implicancias para los trabajadores de la industria*" (C 9/3).

La Sociedad Rural (SRA), mediante un comunicado, expresó que "Medidas como las adoptadas ayer son de corto plazo y no resuelven el problema de fondo, que es la escasez de ganado vacuno" (LN 10/3); además de que con esto "se perderían miles de empleos y mercados por 525 millones de dólares. El daño es incalculable (...) y traerá aparejada la quiebra de varios frigoríficos" (C 10/3).

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, repitió que "*están en juego unos 10 mil puestos de trabajo*" (C 10/3).

En el mismo sentido se manifestaron la Confederación de Asociaciones Rurales de Bs.As. (Carbap), la

Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Casfe), la Cámara de Productores Exportadores Argentinos, la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne (Cicra), el Consorcio de Exportadores de Carne Argentina, (cuyo titular, Carlos Oliva Fúnes, también preside a la empresa Swift) y el Centro de Consignatarios de Productos del País.

También hizo lo propio el diario La Nación, proponiendo en su editorial el siguiente **plan**, que debería imponer el gobierno para resolver la inflación: "atacar la expansión monetaria para sostener un tipo de cambio más alto del que resultaría del mercado, el gasto público elevado, aumentos salariales no relacionados con la productividad y carencia de inversiones por falta de incentivos" (LN 10/3).

Desde el exterior, hubo fuertes críticas en Rusia, puntualmente desde la Asociación Nacional de la Carne (ANC); y en Italia, desde la Asociación Nacional de Industria y Comercio de Carnes y Ganado (Assocarni); y la Unión de Importadores, Exportadores, Industriales, Comisionarios, Frigoríficos, de Carnes, ganados y productos derivados (Uniceb), cuyo presidente, Renzo Fosfato, sostuvo: "Estamos muy preocupados, no sólo en Italia sino en todo la Unión Europea" para amenazar con que "Si realmente el gobierno sigue adelante con su anuncio será darle una ventaja a Brasil" (LN 11/3).

Desde el personal político, rechazaron la medida Alberto Natale (Demócrata Progresista), Alberto Rodríguez Saa (gobernador de San Luis, PJ), el macrismo (PRO), Francisco Ferrero (diputado UCR provincia de Bs. As.), UCR Comité nacional, y Elisa Carrió (ARI).

### Los posicionamientos que sostienen las medidas oficiales

La Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Cap.Fed. expresó en voz de su titular, Alberto Williams, que "Todo lo que pueda ayudar a traer soluciones en este momento de alza del mercado —que está incontrolable— es bienvenido. Esperemos que la medida del gobierno pueda frenar el aumento" (C 10/3).

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su presidente, Osvaldo Comide, reiteró su alineamiento con el gobierno y la política de control de precios al decir que "el gobierno tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de carne para el mercado interno", juzgando la medida como "muy positiva" (C 10/3).

Por su parte, la Asoc. Empleados de la DGI (a.e.d.g.i.), publicó una solicitada en el matutino Clarín, apoyando la "acertada medida presidencial de suspender las exportaciones de carnes privilegiando el consumo popular" (C 15/3).

### Segundo momento: llamado al boicot y castigo a consignatarios

A mitad de mes, la *contra-respuesta* del gobierno, lejos de contemperar con la posición de las fracciones burguesas vinculadas al negocio de la carne (productores, rentistas, distribuidores, exportadores), profundizó la brecha a niveles, a primera vista, irreconciliables. Primero, el propio Néstor Kirchner llamó al boicot, como hiciera en su momento contra los

aumentos de precios de la petrolera Shell (y que tanto resquemor causaron en todas las fracciones del capital), diciendo: "Vecinos, compren menos carne si no bajan los precios. Hagamos sentir nuestro poder de consumo, que no nos vendan a cualquier precio. Eso es conciencia, ustedes lo pueden hacer" (C 15/3). Más tarde se reforzaría este pedido con una solicitada en los principales matutinos (C 17/3).

Acto seguido, el gobierno suspendió a once consignatarios de ganado que operan en el mercado de Liniers, por mantener deudas con la AFIP, además de hacer público un listado con sus nombres.

### Los posicionamientos en oposición a las medidas oficiales

Inmediatamente, el Frente Agropecuario Nacional lanzó un comunicado que denunciaba las "acciones populistas e inconducentes" del gobierno (C 15/3), mientras el consorcio de los frigoríficos exportadores ABC, advertía que "las medidas traerán consecuencias para 15.000 trabajadores" (C 23/3).

Fue en este momento en donde las entidades **descentralizaron** la protesta: las quejas llegaron simultáneamente desde el nivel regional de agrupamiento. Por un lado, en el interior de Buenos Aires, los productores nucleados en la Asociación Rural de Salliqueló organizaron un paro agropecuario y una movilización en contra de las medidas oficiales; por el otro, la Sociedad Rural de Tres Lomas y la Sociedad Rural de Río Cuarto coincidían en que la acción gubernamental eran "muestra del autoritarismo del Presidente (...). Nosotros le acercamos propuestas que no escuchó" (LN 31/3).

El sentido estratégico de esta "descentralización" marca un nuevo nivel en la lucha. Así lo explican las palabras amenazadoras del vicepresidente de la SRA, Luis Biolcatti, para quien la política oficial "está provocando una situación de incertidumbre que se va traduciendo en **descontentos que tratamos de calmar**" (LN 31/3).

Finalmente, nuevamente La Nación interviene definiendo que la disputa con el gobierno pasaba a una nueva fase: "del conocido intervencionismo a injustificadas clausuras". Esta situación atenta, según el diario, contra la reproducción del capital a escala nacional, dado que "la inquietud se proyecta a la comunidad de negocios en general, dado que acciones contrarias a una actividad productiva, cualquiera que sea, deben atenerse a las normas legales vigentes" (LN 22/3).

Sin embargo, cabe detenerse en una última cuestión. Desde su línea editorial, La Nación llama a evitar una escalada en la lucha, consciente de los riesgos de darle un motivo de cohesión a la *alianza social* en el gobierno, formada por una *fracción del capital concentrado en la Argentina* (subsidiada gracias a las retenciones aplicadas al campo) y por la *fracción mayoritaria de la clase obrera y el pueblo en general*. El editor sostiene, entonces que "Son comprensibles el malestar y las razones que han enervado a los ganaderos aunque no puede compartirse el camino de la protesta y de los paros agropecuarios para intentar torcer las decisiones oficiales" (LN 29/3).

Quien escribía esas líneas, tenía en cuenta la situación que pasamos a describir a continuación.

## Coyuntura política

Al analizar lo ocurrido durante marzo veremos que las diferentes formas que va tomando la organización y acción popular, de una u otra manera, van adquiriendo cada vez una mayor incidencia. Así, en nuestra última entrega, analizábamos los hechos ocurridos en tal sentido en Gualeguaychú, Entre Ríos, y en Las Heras, provincia de Santa Cruz.

Como veremos, durante marzo este tipo de hechos locales se siguieron sucediendo, y nada anuncia que vayan a detenerse. Aun cuando, en algunos casos, como veremos, sean resignificados por la dirigencia política, en función de destituir intendentes o gobernadores de tal o cual signo.

Ante la situación así planteada, el diario La Nación, a través de su opinólogo estrella, Mariano Grondona, volvía con una advertencia que no se leía desde los agitados primeros meses de 2002, con el desarrollo de asambleas populares y el sistema político en una crisis que parecía no tener salida: la peligrosidad del avance de formas de democracia directa frente a la “civilizada” democracia representativa. Luego de recordarnos, como en aquellas ocasiones, que “Nuestra constitución, por ejemplo, establece que ‘el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes’”, y aclararnos que no se “ha tenido más remedio que escoger la forma indirecta en vez de la directa, aunque sea menos democrática, por razones prácticas”, Grondona pasa a analizar la situación presente: “En la Argentina, la democracia representativa está siendo atacada arriba y abajo por un movimiento de pinzas. Por abajo, la sitian movilizaciones audaces que exigen soluciones al margen de los cuerpos representativos. Por arriba, la condiciona un presidente que pretende identificarse con la voluntad del pueblo (...). El virus de las ‘puebladas’ que pretenden encarnar la voz del pueblo (...) no ha hecho más que propagarse (...). Pero tal democracia directa (la ateniense, de la Grecia antigua), cuando fue tal, estaba institucionalizada. Las ‘puebladas’, en cambio, son tan potentes como inorgánicas, y sólo están abiertas al más enojado o al más audaz. Esta relación directa que el Presidente quiere establecer con lo que él estima son las espontáneas expresiones populares podría encaminarnos entonces, no ya a una democracia directa auténtica, a la manera de Atenas, sino a un cesarismo democrático: a la proclamación de un contrato político entre un líder carismático y su pueblo que, lejos de desembocar en alguna de las formas democráticas reconocidas, no es sino otra de las múltiples expresiones de la autocracia” (LN 19/3).

La situación tampoco pasaba inadvertida al editorialista de Clarín, con el agregado de ofrecer “desinteresadamente” los servicios periodísticos como vía para los reclamos sociales. Reproducimos completo dicho editorial, que a nuestro entender, no tiene desperdicio: “Una sucesión de hechos, a los que se agrega la protesta que tuvo lugar en Misiones el lunes pasado, indica que la respuesta desmedida y violenta se ha convertido en una forma recurrente de protesta. Un antecedente significativo fue el incendio de vagones de ferrocarril y la destrucción de la estación de Haedo, en noviembre del año pasado, por pasajeros y, presuntamente, grupos organizados. En febrero, en el marco de un reclamo por un trabajador detenido,

un grupo atacó la comisaría de Las Heras y mató a un oficial. El lunes pasado, manifestantes que reclamaban la renuncia de un intendente atacaron y quemaron la Municipalidad de San Vicente, ciudad de la provincia de Misiones. El cuadro legal vigente reconoce el derecho a protestar y manifestar y el sistema democrático permite el ejercicio de esos derechos y ofrece numerosas vías de comunicación de los reclamos, como sucede con el libre acceso a los medios de difusión masiva que generalmente se hacen eco de las demandas sociales. En este contexto nada justifica el ejercicio de la violencia. Sin embargo, la reiteración de hechos como los señalados muestra que las actitudes violentas y destructivas se han convertido en un recurso habitual en la forma de encarar los conflictos, que surge muchas veces de grupos que, como sucede con los de trabajadores o vecinos, no están orientados al ejercicio de la violencia, como podría suceder con un grupo político extremista. Se trata de un **síntoma social preocupante** que deber ser analizado por las autoridades y que requiere, en primer lugar, más atención y prevención en el desarrollo de los conflictos” (C 21/3).

Veamos pues qué sucedió durante marzo, que tanto preocupa a los dos matutinos de mayor tirada del país.

### La descomposición de la “política tradicional”

Mes a mes venimos siguiendo la descomposición de los partidos políticos tradicionales, así como sus fracturas y realineamientos, que no logran de todas formas, recomponer su relación con la sociedad en general. Muestra de ello, en la coyuntura de este mes, la tenemos en las distintas opciones políticas.

**UCR:** con una feroz crisis interna tras los desastrosos resultados electorales posteriores a la frustrada experiencia de la Alianza, y con una fractura partidaria en cuanto al grado de acercamiento u oposición al gobierno nacional, la situación es cada vez más tensa. Ante la acusación del presidente del partido, Roberto Iglesias, referida a una supuesta “compra de voluntades” por parte de Kirchner para explicar los votos radicales a favor de la iniciativa oficial de reformas en la Justicia, el gobernador mendocino Julio Cobos, opositor a la gestión de Iglesias, y cercano al presidente Kirchner señaló: “Si hay algún cuestionamiento (de Iglesias) debe hacerse a través de la Justicia y no salir a hacer declaraciones que tienen que ver con la honra de una persona’, en una inocultable defensa del presidente Kirchner” (C 4/3).

Al día siguiente, llegó la respuesta de Iglesias: “Si la convención de mi partido no expulsa a los cinco diputados radicales que votaron las reformas del Consejo de la Magistratura, yo tengo que irme” (C 5/3).

Por el momento, todo quedó en amenazas.

**Propuesta Republicana (Pro):** a la crisis interna producto de las diferencias entre los dos principales aliados (Mauricio Macri y Ricardo López Murphy) en cuanto a la inclusión o no en la alianza de centro-derecha del gobernador neuquino Jorge Sobisch, y a la tormenta desatada tras el apoyo a las reformas en la Justicia impulsadas por el oficialismo por parte de legisladores del Partido Renovador de Salta, miembros también de la alianza, se le sumó el anuncio del Presidente de la Uce-

dé, Pereyra de Olazábal, del abandono de dicha fuerza política del espacio “por discrepancias insalvables en cuanto al manejo político de la cúpula de la coalición. Nos vamos de la alianza. No podemos seguir con Macri, que no nos da participación y todo lo decide sin consultar” (LN 9/3).

**PJ:** Tras el “desbande” de las filas duhaldistas, en gran medida hoy devenidas kirchneristas, y la conformación de un bloque opositor denominado “Federal”, se conformó, por parte de este último sector, la corriente interna El General, integrada, entre otros, por los ex duhaldistas y ex menemistas Eduardo Camaño, Juan José Álvarez, Jorge Sarghini, María del Carmen Rico, Adrián Menem, Alejandra Oviedo y Carlos “Tato” Brown (LN 11/3).

Ante esto, el diputado kirchnerista Carlos Kunkel encabezó un encuentro en reclamo de unidad partidaria, y señaló: “Hay que olvidar las diferencias de las elecciones pasadas y buscar el camino para trabajar juntos”. Antonio Caferio, orador en dicho acto, agregó: “Llamo al diálogo y a la unidad. Y no se confundan. El peronismo no es de derecha ni de izquierda” (LN 11/3).

### Organización y acción popular: conflictos locales

**Papeleras:** En nuestra última entrega, hemos analizado exhaustivamente los posicionamientos respecto del conflicto desatado en Gualguaychú y Colón, por la resistencia popular organizada en asamblea permanente contra la instalación de dos papeleras en la costa oriental del río Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos. Decíamos entonces que la situación planteada era irresoluble en el marco de lo existente, debido a que la mayor inversión de la historia del Uruguay era imposible de detener en la lógica del capital, pero el reclamo vecinal y de organizaciones ambientalistas había cobrado tal magnitud que su planteo inflexible de no instalación de las papeleras había logrado instalar el conflicto en las más altas esferas gubernamentales, dejando poco o ningún margen para un acuerdo consensuado. Durante marzo, la situación no cambió demasiado. Si bien es cierto que ambas asambleas vecinales decidieron momentáneamente levantar los cortes de ruta, y las papeleras anunciaron la suspensión provisoria de las obras (medida que al cierre de esta edición no se había efectivizado, según las empresas por cuestiones operativas), ambos “gestos” para facilitar una negociación entre los presidentes Kirchner y Vázquez, ésta sigue trabada, con suspensión de cumbre presidencial incluida hasta nuevo aviso. Ante esto, lo más probable es el recrudecimiento del conflicto, con nuevos cortes de ruta y el endurecimiento de las asambleas vecinales.

**Destitución de Ibarra:** Luego de poco más de un año de sucedido el incendio en la discoteca Cromagnon, en el que murieron 193 personas, la Legislatura porteña destituyó al, hasta comienzos de marzo, Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, provocando la consecuente asunción de su vice, Jorge Telesman.

Más allá de los posicionamientos que a lo largo de este juicio político se vivieron, durante el cual quedó en

evidencia un fuerte accionar de la coalición encabezada por Mauricio Macri en favor de la destitución, lo cierto es que la misma fue posible por el accionar de los familiares de las víctimas del incendio, aun cuando sus posturas no fueron homogéneas debido a que un sector de los mismos no apoyaba la destitución de Ibarra.

**Municipalidades incendiadas:** El 13 de marzo, un grupo de pequeños y medianos productores rurales tomaron e incendiaron la municipalidad y cercaron la comisaría obligando a los policías a refugiarse en su interior, en San Vicente, Misiones. Los manifestantes exigían la inmediata destitución del intendente, acusándolo de corrupción (LN 14/3).

Por su parte, el 20 de marzo, trabajadores estatales incendiaron la municipalidad de San Pedro, en Jujuy, reclamando la reincorporación de 40 trabajadores despedidos (LN 21/3).

**Reclamo petrolero:** En Las Heras, Santa Cruz, tras el desarrollo del conflicto analizado el mes pasado, en el que luego de un prolongado paro y corte de ruta protagonizado por trabajadores del petróleo, y ante la detención de uno de los dirigentes de la protesta, se produjo el enfrentamiento con la policía local y la posterior militarización de la ciudad y de los pozos petroleros por parte de Gendamería, y ante la denuncia por la fuerte represión desatada con la detención de decenas de personas, el presidente Kirchner se vio obligado a denunciar la violación de derechos humanos en las mencionadas detenciones. Estos hechos terminaron provocando la renuncia del gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, junto a todo su gabinete.

**Conflicto docente:** En la provincia de Neuquén, el gremio que nuclea a los docentes, ATEN, realiza desde principios de marzo un paro por tiempo indeterminado incluyendo cortes de ruta en diversas ciudades en los accesos a pozos petroleros, principal actividad económica de la provincia. Al cierre de esta edición, integrantes del sindicato local de la UOCRA actuaron como “fuerza de choque” del gobernador Sobisch enfrentándose a los docentes para desalojarlos de las rutas cortadas (LN 31/3), pero el conflicto sigue abierto.

### 24 de marzo, el “caso testigo” a nivel nacional

El 24 de marzo -ahora declarado feriado nacional- se realizó, como todos los años, una masiva movilización en repudio al golpe de Estado de 1976, con una fuerte disputa interna entre los diversos organismos y partidos convocantes en cuanto a lo que el acto pretendía expresar: nuevamente, las diferencias pasaron fundamentalmente por el grado de acercamiento u oposición al gobierno. Sin embargo, nos centraremos en nuestra descripción en los diferentes posicionamientos realizados durante marzo, como antesala de lo que luego sería la multitudinaria movilización ya señalada, entendiéndolos como el resultado de la disputa en tomo a esta cuestión en los años precedentes, comenzando si se quiere por los inicios de las movilizaciones de Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de Derechos Humanos.

Volviendo a marzo de 2006, los posicionamientos comenzaban con el discurso de autocrítica pronunciado por el brigadier general Eduardo Schiaffino, jefe de la Fuerza Aérea: “No hay solidaridad con el delito, no hay solidaridad con la tortura y no hay solidaridad con la cobardía (...). La Fuerza Aérea, que hoy me toca conducir, asume la obligación moral ante la Nación de reconocer y repudiar los hechos contra la dignidad del hombre cometidos por integrantes de nuestra institución en aquellos días” (LN 10/3).

Por su parte el jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, dio un paso más, al señalar la vinculación de la actuación de las fuerzas armadas con el proyecto económico implementado: “No debemos olvidar que, además de la instrumentación del aparato represivo, el 24 de marzo de 1976 fue el comienzo de una política económica de enajenación del patrimonio nacional, de endeudamiento externo, de destrucción del aparato productivo en beneficio de la especulación financiera, de pérdida de derechos sociales y políticos y de desarticulación del Estado argentino (...). Esa fue la otra cara del llamado Proceso, donde fuimos víctimas de otra violación atroz de los derechos civiles y sociales, con las consecuencias de pobreza y marginación que aún hoy condicionan nuestro presente’, aseguró. También señaló que los golpes militares fueron generados ‘por intereses ajenos a nuestra nación’ (...). ‘Como lo he expresado anteriormente, el Ejército asume su ineludible responsabilidad por los errores cometidos, ha aprendido a mirar hacia el futuro despojándose del rencor, la desconfianza y los prejuicios que inexorablemente nos esclavizaban a un pasado, cuyas motivaciones no compartimos y que no nos representan (...). Sólo el camino de la verdad y la justicia podrán liberarnos definitivamente de pesada carga” (LN 17/3).

Con el Ejército reconociendo oficialmente la instrumentación de la represión como medio para la aplicación de un plan económico determinado, quedaba establecido como “piso” la aceptación de la existencia de Terrorismo de Estado entre los años 1976 y 1983. Como veremos a continuación, los diferentes posicionamientos tendrán en cuenta esto, como algo establecido, y se pasará a cuestionar, en todo caso, el accionar de las organizaciones sociales, partidarias, etc.

En el caso de la Iglesia católica, nuevamente se llamó a la “reconciliación”, en una declaración del Episcopado, presidido por el cardenal Jorge Bergoglio, que afirma que los hechos que se recuerdan ahora “son una ocasión propicia para que los argentinos nos arrepintamos, una vez más, de nuestros errores y para asimilar, en la construcción de nuestro presente, el aprendizaje que nos brinda nuestra historia (...). Porque se hace urgente la reconciliación argentina queremos afirmar que ella se edifica sólo sobre la verdad, la justicia y la libertad, impregnadas en la misericordia y en el amor” (LN 16/3).

Por su parte, el diario La Nación editorializaba unos días después de la siguiente forma: “La interpretación oficial es que el golpe de Estado de 1976 fue un acto motivado exclusivamente por la voluntad espontánea de derrocar a un gobierno democrático e instaurar una dictadura sangrienta. Se dice que el propósito era impulsar la persecución y represión ilegal de los ciudadanos que no comulgaran con el pensamiento de las Fuerzas Armadas (...). En los ámbitos oficiales o cercanos, se suele

agregar además la interpretación –rebuscada e inverosímil– de que aquella acción fue la condición requerida para eliminar las resistencias populares a un modelo económico de explotación que las Fuerzas Armadas querían adoptar, en connivencia con poderosos intereses económicos (...). Si se trata de alentar la memoria, es un deber de las autoridades y legisladores cuidar que la visión de los hechos del pasado sea completa y no parcial (...). A treinta años del golpe de Estado de 1976, es necesario que superemos el pasado de confrontaciones y de odios que tantas vidas humanas destruyó y que concentremos nuestros esfuerzos en la construcción de un futuro de paz social, convivencia democrática y vigencia irrestricta del Estado de Derecho. A esa meta no llegaremos falseando o parcializando la historia, sino recuperando la verdad total de los hechos que conmovieron a la sociedad argentina en los días aciagos en que prevalecieron la violencia y el fanatismo ideológico. Y, por encima de todo, impulsando la reconciliación definitiva de los argentinos y valorizando el diálogo pacífico y la libertad en el contexto de una democracia de auténtico cuño republicano” (LN19/3).

Y con este mismo planteo, se insistía en el editorial del día 24: “La fecha del 24 de marzo no debe convertirse, de ninguna manera, en un pretexto más para reavivar los viejos antagonismos ni para generar nuevas divisiones en el cuerpo social (...). Los treinta años transcurridos desde 1976 deben servirnos para que tomemos conciencia de que los sucesos de ese año ya son parte de la historia” (LN 24/3).

Ese mismo día, en el acto oficial realizado en el Colegio Militar de la Nación, en el Palomar, Kirchner señalaba en su discurso: “Espero, como reclama la sociedad, que pronto la Justicia determine la validez constitucional o, como pienso yo, la inconstitucionalidad de los indultos (...). No sólo la responsabilidad fue de las Fuerzas Armadas. Sectores de la sociedad, de la prensa, la Iglesia, la clase política argentina, tuvieron también su parte cada vez que se subvirtió el orden constitucional (...). No todos han reconocido sus responsabilidades (...). El modelo económico de la dictadura tuvo un cerebro, con nombre y apellido, que los argentinos nunca deberemos borrar de nuestra memoria, y espero que la memoria, justicia y verdad llegue. Se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz. Lamentablemente, los verdaderos dueños de ese modelo no han sufrido castigo alguno” (LN 25/3).

Finalmente, como ya señalamos, el posicionamiento más masivo fue el de las múltiples organizaciones sociales y partidos políticos que se movilizaron en la fecha señalada, aun cuando en el acto realizado quedaron plasmadas, como ya dijimos, nuevamente las dos posturas respecto al grado de aceptación u oposición que genera el gobierno nacional, lo que se reflejó en la lectura de un documento refrendado por cientos de organizaciones, pero que fue rechazado por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, también parte de la organización del mitin.